
financiamiento del desarrollo

Microfinanzas en Centroamérica: los avances y desafíos

Iris Villalobos

Arie Sanders

Marieke de Ruijter de Wildt



Unidad de Estudios Especiales
Secretaría Ejecutiva

Santiago de Chile, noviembre de 2003

Este documento fue preparado por Iris Villalobos, consultora del proyecto “Políticas financieras para incrementar el ahorro y promover la equidad”, en conjunto con Arie Sanders y Marieke de Ruijter de Wildt. Este es un proyecto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lleva a cabo en la Unidad de Estudios Especiales de la Secretaría Ejecutiva, con el apoyo financiero del Gobierno de Holanda. Los autores agradecen los comentarios de Raquel Szalachman, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad mencionada, a una primera versión de este trabajo y a Hans Nusselder, Coordinador del CDR/ULA, por sus aportes y contribución en la revisión del informe final y a todas las personas que colaboraron proporcionando la información para el estudio.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas
ISSN impreso 1564-4197
ISSN electrónico 1680-8819

ISBN: 92-1-322254-8
LC/L.1982-P

N° de venta: S.03.II.G.141

Copyright © Naciones Unidas, noviembre de 2003. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	7
I. Introducción	11
1.1 Objetivo y enfoque	11
1.2 El desarrollo de las microfinanzas en Centroamérica	12
1.3 Estructura del informe	15
II. Contexto Centroamericano	17
2.1 Crecimiento económico	17
2.2 Las MYPE	18
2.3 Población y pobreza	19
2.4 Sector monetario	20
2.5 Sector financiero	21
III. Microfinanzas en Costa Rica	23
3.1 El sector de las microempresas en Costa Rica	23
3.2 El marco legal del sistema financiero	24
3.3 Evolución del sector microfinanciero	25
3.4 La oferta de los servicios microfinancieros	26
3.5 Cobertura del sector	32
3.6 Captación de ahorros	32
3.7 Potencial y limitaciones del sector microfinanciero	33
IV. El Salvador	35
4.1 El sector de las microempresas en El Salvador	35
4.2 Marco legal del sistema financiero de El Salvador	36
4.3 Evolución del sector microfinanciero	36
4.4 La oferta de los servicios microfinancieros	37
4.5 Cobertura del sector	40
4.6 Potencial y limitaciones del sector microfinanciero	41
V. Guatemala	43
5.1 El sector de las microempresas en Guatemala	43
5.2 El marco legal del sistema financiero	44
5.3 Evolución de las microfinanzas	44
5.4 El rol del Estado	46

5.5	Oferta de los servicios microfinancieros.....	47
5.6	Potencial y limitaciones del sector microfinanciero.....	51
VI.	Conclusiones y recomendaciones.....	55
6.1	Conclusiones.....	55
6.2	Recomendaciones.....	59
Bibliografía	61
Serie financiamiento del desarrollo: números publicados	65

Índice de cuadros

Cuadro 1-1	Afiliadas Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF).....	15
Cuadro 2-1	Indicadores de la Producción Interna Bruta – PIB (2001)	18
Cuadro 2-2	Indicadores de las MYPE en Centroamérica (1999).....	18
Cuadro 2-3	Población estimada según zona de residencia, extensión territorial y densidad de la población por país (1998).....	19
Cuadro 2-4	Indicadores del sector monetario.....	20
Cuadro 2-5	Tasas de interés reales.....	21
Cuadro 2-6	Indicadores del sector bancario (diciembre, 2002)	22
Cuadro 3-1	Principales problemas financieros según tamaño.....	24
Cuadro 3-2	Sistema bancario y participación de los bancos estatales.....	25
Cuadro 3-3	La línea de crédito para las MYPE del Banco de Desarrollo	28
Cuadro 3-4	Tasas de «El Verdugo» cobradas por producto según período	31
Cuadro 3-5	Instituciones financieras y variables relevantes	32
Cuadro 4-1	Índices generales de la Red ASOMI	39
Cuadro 4-2	ALPIMED Indicadores financieros de la red (noviembre 2002)	40
Cuadro 4-3	Instituciones financieras y variables relevantes	41
Cuadro 4-4	Puestos de servicio para la MYPE de El Salvador, por departamento	41
Cuadro 5-1	Créditos cartera activa, créditos activos y promedio de crédito.....	49
Cuadro 5-2	Instituciones financieras según grupos afines y variables relevantes.....	50

Siglas

ACT	Asociación de Cooperación Técnica
AGEF	Asociación Gremial de Entidades Financieras
ADRI	Asociación para el Desarrollo Rural Integrado, Costa Rica
ALPIMED	Alianza para el Desarrollo de la Microempresa. El Salvador
ASOMI	Asociación de Organizaciones de Microfinanzas – El Salvador
ASOMIF	Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas
AUDICOOP	Auditoría de Instituciones Cooperativas
BANDESA	Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima
BCAC	Banco Crédito Agrícola de Cartago
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BCR	Banco de Costa Rica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BNCR	Banco Nacional de Costa Rica
BP	Banco Popular
CAC	Cooperativas de Ahorro y Crédito
CALPIA	Financiera Calpiá -El Salvador
CDR/ULA	Centro de Estudios para el Desarrollo Rural – Universidad Libre de Amsterdam
CGAP	Consultative Group to Assist the Poorest

CONAMYPE	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
CONSUMPYE	Consejo Superior de Apoyo a las MYPE
CRS	Catholic Relief Services
CRYSOL	Fundación Crysol
FAFIDESS	Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social
FEDECACES	Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador
FENACOAC	Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito - Guatemala
FINDESA	Financiera Nicaragüense de Desarrollo S.A., Nicaragua
FONAMYPE	Fondo Financiero de Segundo Piso
FUNDAP	Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos
FUNDEA	Fundación para el Desarrollo Integral y Agrícola (parte del grupo ACT)
FUNDES	Red de fundaciones privadas de Suiza y América Latina
IMF	Intermediarias Microfinancieras
MYPE	Micro y Pequeñas Empresas
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
PROMICRO	Programa de la Microempresa en Centroamérica
REDCAMIF	Red Centroamericana de Microfinanzas
REDIMIF	Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala
SIAMPE	Sistema de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas
SUGEF	Superintendencia General de Entidades Financieras
USAID	United States Agency for International Development
VIMIPYPE	Vice-Ministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa en Guatemala
WOCCU	Worldwide Organization of Cooperative Credit Unions

Resumen

En el presente estudio, se analizan las experiencias de las microfinanzas en tres países centroamericanos, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, con el fin de obtener un mayor conocimiento de los factores que han contribuido al desarrollo de este sector, sus logros y desafíos. Se considera que estos tres países ofrecen algunas tendencias de interés. Costa Rica es el país más estable de la región tanto en términos económicos como políticos y, por ende, ofrece un contexto más sólido, aunque no necesariamente más favorable para el desarrollo de las microfinanzas. El Salvador, el país más poblado, registra el mayor avance en la regulación de las instituciones de microfinanzas. Guatemala presenta una situación de pobreza extrema entre su población indígena, la cual representa el 70% de la población. Estas diferencias hacen que el desarrollo de las microfinanzas deba ser contextualizado según la dinámica de los diferentes países y preservando el objetivo que les dio origen, es decir, otorgar un servicio financiero sostenible a una población de bajos recursos.

Uno de los retos que enfrenta la región es el “combate a la pobreza”. A su vez en términos de políticas de desarrollo, el fortalecimiento de las microfinanzas, entendida como el aumentar el acceso a servicios financieros (ahorros, crédito, seguros, transferencias de recursos, entre otros) por parte de los sectores de bajos recursos, ha sido visualizado como una estrategia viable de combate a la pobreza. Gran parte de las inversiones de la cooperación internacional y de los gobiernos centroamericanos, en la última década se ha canalizado a apoyar programas de financiamiento al sector.

Las MYPE, en Centroamérica siguen siendo consideradas una de las fuentes de empleo e ingresos más importantes. Se estima que alrededor del 30% de la población económicamente activa

se encuentra en este sector, representando 2,3 millones de personas y 1,8 millones de unidades económicas (PROMICRO 2000 y, Arroyo y Nebelung 2002).

El problema de acceso al crédito por parte de los sectores más pobres de la población y de las áreas rurales, continúa sin ser resuelto. El recurso financiero para las micro y pequeñas empresas representa costos superiores a los de la empresa formal. La banca formal en Centroamérica opera con costos que van desde un 3% hasta un 16%, expresados como porcentaje de la cartera. El sector microfinanciero, salvo algunas organizaciones exitosas, opera con costos en la mayoría de los casos superiores a un 25%.

La sostenibilidad del servicio continúa siendo un reto para la mayoría de organizaciones que apoyan al sector, especialmente las organizaciones no gubernamentales (ONG). Son pocas las organizaciones que son autosostenibles desde el punto de vista financiero, entendiendo como tal que protegen los fondos del efecto inflacionario, cubren sus costos operativos y generan un excedente para la expansión. Por otra parte son también pocas las que pueden tener acceso a los recursos financieros en el mercado, lo cual evidencia las pocas posibilidades de sobrevivir sin el apoyo de la cooperación internacional.

Las metodologías de financiamiento que dieron origen a las microfinanzas (bancos comunales, grupos solidarios, entre otros) parecen agotarse y se observa una marcada tendencia a la individualización del crédito y al uso de la garantía real como mecanismo de respaldo a las operaciones crediticias. Los mecanismos financieros, operativos y administrativos para ofrecer un servicio crediticio de menor costo para el usuario y que a su vez garantice la permanencia del servicio (autosostenibilidad), no parecen estar claros.

Al analizar el sector de las microfinanzas en cada uno de los tres países, se encuentra que, en el caso de Costa Rica, el desarrollo de las microfinanzas ha sido limitado en comparación con los otros países centroamericanos. El incipiente desarrollo del sector microfinanciero se debe principalmente a la contracción del apoyo de la cooperación internacional y la presencia de la banca estatal con programas especiales de apoyo al sector. El Salvador, es el país en donde las microfinanzas han alcanzado el mayor nivel de dinamismo y desarrollo. La creación de dos redes de las organizaciones que trabajan en el sector microfinanciero, la presencia de centrales de riesgos, el papel activo de la banca privada en el sector, la creación de una ley para la regulación de las instituciones financieras no reguladas son algunas evidencias de este dinamismo. En El Salvador se observa cierto nivel de saturación en el mercado, resultando en un aumento de la competencia entre las instituciones microfinancieras. El sector microfinanciero en Guatemala ha recibido un importante impulso a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Estos acuerdos resultaron en fondos frescos de la cooperación internacional para el sector MYPE, entre otros para los servicios financieros. Dentro de la oferta de los servicios microfinancieros a las MYPE en Guatemala se ubican una gran variedad de actores que involucran cooperativas de ahorro y crédito, bancos privados y organizaciones no gubernamentales.

A través del análisis del sector microfinanciero en tres países diferentes se llega a la siguiente conclusión: el desarrollo del sector de las microfinanzas en Centroamérica es desigual. Se observa un cambio importante en cuanto al enfoque hacia el instrumento microcrédito en comparación con los años ochenta. En todos los países hay un enfoque donde la sostenibilidad financiera es un elemento clave para el desarrollo del sector. Sin embargo, en términos generales, la cobertura sigue siendo limitada. Gran parte de la población aún no tiene acceso a los servicios financieros. No obstante, la oferta crediticia, con la excepción de Costa Rica, tuvo un crecimiento importante en cuanto al número de oferentes; crecimiento que se explica por la ayuda recibida de la cooperación internacional.

En los países centroamericanos se observa una tendencia hacia la comercialización de los servicios microfinancieros. Es decir, el papel de las entidades reguladas es cada vez más substancial

en el ámbito de los servicios microfinancieros. Ejemplo de ello son entidades como CALPIA en El Salvador, Génesis Empresarial y Banrural en Guatemala y en un futuro próximo ADRI en Costa Rica. Esta comercialización trae como ventajas la profesionalización de los servicios ofrecidos y por ende la obtención de instituciones financieramente sostenibles. Si bien esta madurez genera instituciones fortalecidas, existe un riesgo de que dicha comercialización afecte la profundidad de las carteras crediticias manejadas por éstas.

El desafío más importante para el sector, es la creación de un marco de regulación y supervisión adecuado que no afecte las metodologías innovadoras aplicadas por las IMF para entregar servicios financieros ajustados a la población de bajos recursos.

I. Introducción

1.1 Objetivo y enfoque

Las microfinanzas se han convertido en un instrumento importante para el desarrollo de sectores de bajos recursos. Durante la última década, los programas microfinancieros han experimentado importantes innovaciones, producto del éxito alcanzado por entidades como el Banco Grameen en Bangla Desh y de Bancosol, en Bolivia. El objetivo común de los nuevos programas de microfinanzas es el de atender a una población de bajos recursos y lograr un cierto impacto en el bienestar de los hogares.

El “boom” de las microfinanzas a nivel mundial, se observó también en la región centroamericana. Centenares de organizaciones, principalmente a través de la cooperación internacional, se convirtieron y/o fueron establecidas para dirigir sus servicios hacia las microfinanzas. Miles de personas han sido atendidas por IMF, especialmente en las áreas urbanas. Sin embargo, no todas ellas han sido exitosas en el logro de un equilibrio financiero que les permita mantener sus operaciones.

Mediante la publicación de los resultados del presente estudio, se espera aportar a la discusión sobre el tema de las microfinanzas y participar en la formulación de políticas hacia el sector. La base del estudio es una revisión de la literatura existente sobre experiencias microfinancieras en Centroamérica y el resultado de entrevistas con actores del sector (anexo N° 1). De manera específica se destaca la información de tres países: Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

El estudio combina una perspectiva global sobre las microfinanzas en Centroamérica, con un acercamiento a algunos casos seleccionados en estos tres países.

1.2 El desarrollo de las microfinanzas en Centroamérica

Los países centroamericanos han pasado por diferentes etapas para poder ampliar la frontera de las microfinanzas. Durante estos años, la visión sobre las microfinanzas ha sido modificada tanto en sus alcances como en el papel que deben cumplir dentro de los programas financieros. Desde esta perspectiva, la discusión sobre las microfinanzas se ubica en tres períodos:

- a) Los bancos de desarrollo (entre la década de los años sesenta y setenta);
- b) El nacimiento de las ONG (década de los ochenta); y
- c) La profesionalización de las IMF (década de los noventa a la fecha).

En cada etapa se han identificado características generales de los programas de crédito, las cuales apoyan y explican las tendencias actuales de la intermediación financiera.

a) Años sesenta y setenta

Durante estas dos décadas los mercados financieros de la región centroamericana se caracterizaron por una alta participación del sector público, sobre todo en la creación de instituciones y programas, cuyos objetivos principales eran la canalización de recursos subsidiados hacia el sector agropecuario. Las entidades públicas más importantes para el otorgamiento de los créditos fueron los bancos de fomento y/o de desarrollo, los cuales funcionaban desde los años veinte y treinta. En Costa Rica, el Banco de Fomento operaba a través de Juntas Rurales, fundadas en 1914 como departamentos especiales dentro del Banco Nacional de Costa Rica. En Honduras, se creó el Banco Nacional de Fomento (1950), convertido luego en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANDESA).

Estos bancos otorgaron créditos a su clientela y en muchos casos, iban acompañados por programas especiales de asistencia técnica, ejecutados por los ministerios de la agricultura de cada país. Con la combinación de elementos esenciales para el desarrollo del sector agropecuario, tales como el capital y la tecnología, se esperaba fortalecer la pequeña producción agrícola y participar en la solución de los problemas de pobreza. Las intervenciones financieras a través de los bancos de desarrollo, causaron impactos importantes en el sector agrícola. Estos bancos estimularon la adaptación de las tecnologías de la “revolución verde”. Sin embargo, el enfoque no resultó como se esperaba. Al igual que en otros países, los bancos de desarrollo tuvieron serios problemas en su ejecución, entre los cuales se señalan:

- a) Bajos niveles de recuperación de los créditos otorgados;
- b) Tasas de interés subsidiadas. Estas tasas eran insuficientes para cubrir los gastos relacionados con el otorgamiento de los préstamos y, además, no reflejaban la escasez del capital en el mercado, lo cual generó una sobredemanda de estos recursos, especialmente por parte de los grandes productores; y
- c) La intervención estatal en la toma de decisiones sobre las colocaciones y recuperaciones de los préstamos, se fundamentaba más en aspectos políticos que técnico-financiero.

Estos problemas observados con los bancos de desarrollo fueron comunes a todos los países centroamericanos. La mayoría de estos bancos pasaron por diversas crisis y tuvieron que ser recapitalizados mediante nuevas “inyecciones” financieras de sus respectivos gobiernos.

b) Años ochenta

En este período (años ochenta hasta mediados de los noventa), los ajustes estructurales disminuyeron las intervenciones directas del Estado sobre los diferentes mercados, entre ellos el financiero. Las limitaciones de una ejecución efectiva de los bancos de fomento, resultaron en una disminución de su papel como proveedor de crédito.

La retención del Estado en el mercado financiero estimuló a varios actores a intentar llenar el vacío dejado por éste. Entre los actores más detectados con mayor frecuencia se encontraban los proyectos de desarrollo, las ONG y las cooperativas de ahorro y crédito (CAC). Estos tres actores eran los que dependían principalmente para su funcionamiento, de los recursos otorgados por la cooperación internacional.

Los proyectos de desarrollo, especialmente en las áreas rurales, fueron establecidos para asumir el papel del Estado en actividades como la asistencia técnica y el financiamiento. La mayoría de estos proyectos manejaban un enfoque integrado hacia el desarrollo. Además, replicaron gran parte de las tecnologías utilizadas por los bancos de desarrollo, es decir, créditos dirigidos bajo supervisión de los técnicos y condiciones blandas. Parte importante de los proyectos agotaron sus fondos crediticios antes o poco después de su cierre. Sin embargo, existen algunos casos donde los fondos se utilizaron como capital semilla para establecer nuevas instituciones de microfinanzas (Clemens y Wattel 1998).

Los actores más importantes, que trataron de asumir el papel del Estado fueron las ONG. Durante los años ochenta se establecieron centenares de ellas en la región y el otorgamiento de servicios financieros, fue una de sus actividades principales. Se concentraron en la colocación de préstamos, debido a que las leyes financieras no permiten que las instituciones no reguladas capten ahorros del público. Estas ONG han estado representadas por un grupo sumamente heterogéneo en: sus objetivos planteados, el grupo meta a atender, el tamaño de las carteras, el alcance geográfico, la cantidad de clientes y el tamaño del equipo de trabajo.

Algunas experiencias señalan a organizaciones que trabajan localmente con grupos conformados por unas 30 personas cuyos fondos no superan los 10.000 dólares. Pero también instituciones microfinancieras especializadas con carteras superiores a 5 millones de dólares distribuidos entre 5.000 clientes. No obstante, su participación en el desarrollo de las microfinanzas, no significó su éxito automático. De hecho, muchas de éstas cometieron los mismos errores de los bancos de desarrollo y sólo pudieron mantener sus operaciones con “inyecciones” continuas de capital fresco.

En esta época también se inició el debate sobre la autosuficiencia de las entidades financieras. Mediante este debate hubo un creciente consenso con respecto a que los programas de crédito debían mantener una situación financiera sólida, a través de la cobertura de sus costos de operación con los ingresos generados con el manejo de sus carteras. La capacidad para lograr la autosuficiencia se convirtió durante este período, en una forma de medir el éxito de un programa crediticio. Tasas de interés reales positivas, la contratación del personal técnico y la introducción de sistemas de control para monitorear las carteras, fueron algunos de los cambios que se observaron en las instituciones microfinancieras que buscaban la autosuficiencia.

c) Años noventa

Durante esta década se inició la visión sobre la especialización y expansión de los servicios financieros. Como producto de este proceso, se encuentran en la región centroamericana organizaciones como CALPIA (El Salvador), Génesis Empresarial (Guatemala), Fundación COVELO (Honduras), ADRI (Costa Rica) y FINDESA (Nicaragua). Estas se han convertido en instituciones especializadas de crédito cuyos objetivos principales son los de mejorar la calidad y

eficiencia de sus operaciones y expandirse de manera significativa. CALPIA y COVELO dejaron de ser ONG, para convertirse en instituciones financieras reguladas como parte de su estrategia de expansión.

A nivel de los mercados microfinancieros se observa la especialización de las ONG y un aumento de la competencia por parte de nuevos actores, tales como las CAC y la banca privada. La liberación financiera de los años noventa estimuló la competencia entre la banca privada. Se tuvieron que descubrir nuevos mercados para mantenerse en el sector, uno de ellos fue el de los créditos de consumo. Gran parte de la nueva clientela para esta línea de crédito pertenece al estrato intermedio-bajo. Además, la existencia de varios bancos privados que han estado experimentando con líneas específicas de microfinanzas, tales como el Banco Agrícola y el Banco Salvadoreño, ambos en El Salvador (Helms 2002).

De gran interés fue la expansión de la banca privada a través de los créditos de consumo, los cuales influyeron en el desarrollo de las cooperativas. Históricamente la línea crediticia más importante para las CAC fue la de consumo, pero no compitieron con la banca debido a la poca agilidad en su estructura organizativa y a las limitaciones en los asuntos financieros. Sin embargo, esta competencia estimuló la búsqueda de una nueva clientela y el establecimiento de líneas microfinancieras por parte de las CAC (Westley y Branch 2000), como ejemplo están las cooperativas afiliadas a FEDECACES (El Salvador) y de FENACOAC (Guatemala).

d) Estado actual

Las tres etapas presentan con claridad una tendencia en el desarrollo del sector microfinanciero en Centroamérica. Cada día más, se exige que los programas sean manejados de forma eficaz para alcanzar autosuficiencia operativa y financiera. Según Christen (2001) el sector de las microfinanzas en América Latina se encuentra en un proceso de comercialización, es decir, cada vez más las instituciones reguladas son las que ofrecen los servicios microfinancieros. Además, hay un crecimiento significativo en cuanto a la competencia entre oferentes, especialmente en Nicaragua y El Salvador donde el mercado de las microfinanzas está cerca de su saturación (Nusselder y Sanders 2002, y Christen 2001).

La comercialización y el crecimiento de la competitividad entre las IMF traen diferentes consecuencias al sector, tanto entre los servicios ofrecidos, como dentro de ellas mismas. Entre los cambios más destacados se encuentran la individualización de los créditos, una mayor eficiencia y ampliación de los servicios ofrecidos (Christen 2000).

Como en todos los mercados, sólo las organizaciones que ofrecen servicios en forma eficiente, sobreviven a largo plazo. De todas las organizaciones que han venido ofreciendo servicios microfinancieros, sólo un grupo selecto permanece en el mercado. En la actualidad, se observa una tendencia a la creación de redes microfinancieras en las que participan las entidades de mayor importancia en los mercados nacionales. El objetivo principal de estas redes es crear más transparencia en el mercado, a través de una autocalificación y regulación que permita consolidar el sector. Aparentemente son estas IMF las que tienen mayor probabilidad de sobrevivir el proceso de maduración de los mercados financieros en Centroamérica (cuadro 1-1).

Cuadro 1-1
AFILIADAS RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS (REDCAMIF)
(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

Países	Institución	IMF (número)	Cartera activa (millones de dólares)	Clientes (número)
Costa Rica	REDCOM	16	19,5	9 400
El Salvador	ASOMI	8	20,0	48 000
Guatemala	REDMIF	20	35,0	97 000
Honduras	COVELO	20	32,0	107 500
Nicaragua	ASOMIF	20	59,8	151 200
Total		84	166,3	413 100

Fuente: Walter (2002).

1.3 Estructura del informe

Luego de esta parte introductoria, el informe presenta en su contenido central las siguientes secciones:

- i) el contexto en que operan las instituciones de microfinanzas, incluyendo temas como la situación macroeconómica y el nivel de pobreza. Este análisis cubre los cinco países centroamericanos.
- ii) el desarrollo de las microfinanzas en Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Se hace una descripción de la evolución, en cada país, de las experiencias más importantes y los principales obstáculos para el avance del sector.
- iii) la última sección la constituyen las conclusiones y recomendaciones para lograr un mayor desarrollo del sector en Centroamérica y,
- iv) finalmente, se presentan los anexos.

II. Contexto centroamericano

2.1 Crecimiento económico

Los cinco países centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, registran diferencias significativas en sus niveles de ingresos (cuadro 2-1). En el 2000, Costa Rica, el país más próspero de la región, registró un ingreso *per cápita* de 3.826 dólares, un monto ocho veces mayor que el de Nicaragua, el país más pobre. Las economías más importantes en el 2001 fueron las de Guatemala y Costa Rica representando el 62% del total de la producción centroamericana, cifra que ha sido constante durante la última década. La participación del mercado nicaragüense representa el 4% a nivel centroamericano.

En general, Centroamérica ha experimentado un reducido crecimiento económico durante los últimos años (CEPAL 2002). Costa Rica por ejemplo, registró una contracción de su demanda interna y el turismo se vio afectado a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América. La economía salvadoreña, por su parte, se vio afectada por la recesión norteamericana y la disminución de la oferta exportable derivada de la sequía sufrida en el año 2001.

Debido a problemas económicos internos y al débil desempeño de los ingresos tributarios, Guatemala sigue registrando indicadores poco favorables. Honduras, que para el 2000 presentó el mayor crecimiento del PIB de la región (5%), se vio afectado por la recesión norteamericana en el 2001. Nicaragua debe su desaceleración al entorno externo desfavorable, al elevado déficit fiscal y a la persistencia de las dificultades del sector bancario. Todas las economías centroamericanas se vieron afectadas por la caída de los precios internacionales del café.

Cuadro 2-1

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN INTERNA BRUTA (PIB) (2001)*(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su fila)*

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
PIB precios corrientes (millones de dólares)	16 363	13 963	20 480	6 387	2 528
PIB /cápita (dólares)	4 060	2 183	1 750	937	486
Tasa de crecimiento PIB					
2001 (%)	1,4	2,5	3,3	4,8	5,0
1997-2000 (%)	6,2	3,5	4,2	2,7	5,7

Fuente: CMCA (2002).

2.2 Las micro y pequeñas empresas (MYPE)

Las micro y pequeñas empresas (MYPE) son una de las fuentes de empleo e ingresos más importantes en los países de bajos recursos. Investigaciones en diferentes países han demostrado que más del 20% de la población activa trabaja en este tipo de empresas. La tendencia es que más personas se involucran en estas actividades (Daniels 1999).

Es común diferenciar la microempresa de la pequeña empresa con elementos cuantitativos, por ejemplo, con el nivel de empleo: las pequeñas empresas tienen entre 5 y 20 trabajadores, mientras la microempresa tiene de 1 a 4 trabajadores. En cada uno de estos estratos, se destacan cuatro subgrupos según su lógica de funcionamiento, se fundamente o no en las perspectivas de crecimiento. Ejemplo: empresas con una lógica de baja subsistencia, con una de media subsistencia, con una de alta subsistencia o con una lógica de acumulación (ILO 2001).

Para la región centroamericana (cuadro 2-2), se estima que alrededor del 30% de la población económicamente activa se encuentra en el sector de las MYPE representando 2,3 millones de personas y 1,8 millones de unidades económicas (PROMICRO 2000), (Arroyo y Nebelung 2002). El sector más importante para las MYPE es el comercio, debido a que su barrera de entrada es relativamente baja en relación con el sector productivo, ya que este último requiere de mayor inversión y conocimiento. Sin embargo, en el caso de Guatemala, se observa una participación relativamente alta del sector de la manufactura, producto de la importancia del subsector de tejidos en este país.

Cuadro 2-2

INDICADORES DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE) EN CENTROAMÉRICA (1999)

País	Personas involucradas				Unidades económicas		
	Comercio	Manufactura	Servicios	Total	Micro empresa	Auto empleo	Total
Costa Rica	88 767	67 881	104 432	261 080	30 027	126 313	156 340
Nicaragua	109 965	45 955	77 140	233 060	15 200	198 101	213 301
El Salvador	353 370	148 722	112 464	614 556	58 031	302 411	360 442
Honduras	156 386	116 760	96 480	369 626	31 465	305 682	337 147
Guatemala	277 678	260 848	302 920	841 446	73 169	673 157	746 326
Total	986 166	640 166	693 436	2 319 768	207 892	1 605 664	1 813 556

Fuente: PROMICRO (2000)

Nota: Las cifras reflejan un cierto nivel de confianza, sin embargo, se ha demostrado que la cantidad de micro y pequeñas empresas (MYPE) existentes es mayor a la que mencionan las estadísticas oficiales. Esto se explica por el hecho de que solo se toman en cuenta las empresas que están registradas.

En un estudio sobre la aproximación del aporte del sector informal urbano al producto interno bruto (PIB) en los países de Panamá y Costa Rica, se concluyó que su aportación era menor al que se esperaba: "Contrariamente a lo que se afirma con frecuencia en ciertos círculos, el sector

informal genera sólo una pequeña proporción del producto no agropecuario, proporción que no muestra ninguna tendencia secular a una expansión significativa, sino que parece determinada esencialmente por el excedente de oferta de trabajo. Parece razonable considerar que la contribución del sector informal a la generación del producto no agropecuario se sitúa en alrededor del 10% en ambos países" (Castiglia, Martínez y Mezzera 1995). El sector de las MYPE en ambos países es menor al registrado en el resto de los países centroamericanos.

2.3 Población y pobreza

La población centroamericana se triplicó durante los últimos 50 años (cuadro 2-3). Las cifras estimadas ascienden a 31.6 millones de habitantes con una densidad de población de 73,2 habitantes por km². Un tercio de la población es guatemalteca y de cada cinco centroamericanos uno es indígena. De cada 10 personas, cuatro son niños o jóvenes de 14 años o menos y de cada 100, seis son mayores de 60 años. La mitad de la población radica en el sector rural y el 20% vive en las 22 ciudades con más de 100.000 habitantes en la región. Con 21.000 km², El Salvador es el país más pequeño y más poblado, con una densidad ocho veces mayor al país menos poblado (Nicaragua).

Cuadro 2-3
**POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA, EXTENSIÓN TERRITORIAL
Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN POR PAÍS (1998)**

(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

País	Población total (en miles)	Población urbana	Población rural	Población (en porcentaje)		Extensión (Km ²)	Densidad (Hab./km ²)
				Urbana	Rural		
Costa Rica	3 840,00	1 900,00	1 940,00	49,50	50,50	50 900	75,4
El Salvador	6 031,00	3 229,40	2 801,60	53,50	46,50	20 935	288,1
Guatemala	10 802,00	4 217,70	6 584,30	39,00	61,00	108 889	99,2
Honduras	6 148,00	2 846,40	3 301,60	46,30	53,70	112 088	54,8
Nicaragua	4 807,00	2 825,80	1 981,20	58,80	41,20	139 000	34,6
Total	31 628,00	15 019,30	16 608,70	49,42	50,58	431 812	73,2

Fuente: Estado de la Nación (2001)

En términos de bienestar, Costa Rica es el país que presenta los mejores indicadores de la región: tiene la menor tasa de mortalidad infantil y la mayor esperanza de vida, el gasto público en educación y salud es el más alto de la región y muestra la menor concentración del ingreso. Adicionalmente, Costa Rica presenta la menor tasa de dependencia, es decir, una menor proporción de personas no trabajadoras entre el total.

En las últimas décadas, los países centroamericanos vienen reduciendo el analfabetismo, no obstante, persiste todavía una gran brecha entre el resultado de Costa Rica (4%) y los demás países, los cuales para el 2000 presentaron tasas de más del 20% para El Salvador y Honduras y el 30% para Guatemala y Nicaragua (36%), siendo éste el país de la región con la mayor proporción de población analfabeta.

La pobreza sigue siendo uno de problemas de mayor importancia en la región, tres de cada cinco personas viven en condiciones de pobreza y dos de cada cinco en pobreza extrema. En las zonas rurales se concentra el mayor índice de pobreza, más del 70% de sus habitantes vive con un ingreso diario inferior a un dólar estadounidense, mientras que en los cascos urbanos es un 56%. La situación de la pobreza es más grave en Guatemala y Honduras, seguido por Nicaragua y El Salvador. Las poblaciones indígenas pertenecen generalmente a los estratos más pobres.

2.4 Sector monetario

La profundidad financiera es uno de los indicadores clave para analizar si el sector financiero registra un crecimiento relativo en relación con los otros sectores. Cuando una economía se moderniza, generalmente el sector financiero crece porque se espera que éste provea los fondos necesarios para financiar la demanda del sector productivo. La manera más común de medir la profundidad financiera del sector es a través de la razón M_2 (la suma de la moneda en circulación más los ahorros), dividida por el PIB.

Durante los últimos cinco años (cuadro 2-4), los países registraron una cierta estabilidad en cuanto a su profundidad financiera. Sin embargo, se observan grandes diferencias entre los países. Para Nicaragua, el sector bancario es relativamente más importante que para los otros países debido a la alta participación del sector público en los créditos internos. En Guatemala, gran parte del dinero de su economía circula fuera del sistema bancario, reflejando un cierto nivel de desconfianza en este sector.

Cuadro 2-4
INDICADORES DEL SECTOR MONETARIO
(Porcentajes)

País	M_2 / PIB		Crédito público / Crédito interno	
	1997-2001	2001	1997-2001	2001
Costa Rica	30,3	31,1	31,4	12,8
El Salvador	44,3	45,1	0,8	4,0
Guatemala	25,1	23,6	-18,1	-23,7
Honduras	40,9	41,7	-39,0	-41,2
Nicaragua	59,6	64,8	67,0	69,1
Promedio regional	40,0	41,2	14,1	9,7

Fuente: CMCA (2002)

El crédito bancario al sector privado es utilizado frecuentemente como indicador indirecto del grado de eficiencia del sistema bancario. El crédito al sector privado suele considerarse más beneficioso para el crecimiento de la economía, en relación con el crédito al sector público. En el caso de Nicaragua, la participación del sector público en el crédito interno neto es la más alta en la región (el 69% en 2001). En el caso de los demás países, gran parte de las reformas han estado acompañadas por un proceso de reducción de la participación del sector público en el crédito interno total. Sin embargo, en Honduras el crédito interno al sector público ha sido sustituido por deuda pública interna, la cual ha resultado en una restricción importante para el manejo macroeconómico del país.

Las tasas de interés reales en la región (cuadro 2-5), se han mantenido relativamente estables durante los últimos años, aunque las diferencias entre los países son bastante elevadas. Las tasas de interés pasivas reales oscilan entre el 1-10%, reflejando que no se aprecian, como en el pasado, tasas reales negativas en la captación de los fondos. En cuanto a las tasas de intereses activas reales, Costa Rica y Nicaragua registraron las tasas mayores. Para Costa Rica, esta situación se explica, entre otros, por el desequilibrio del balance comercial y la expansión del déficit fiscal, mientras que en Nicaragua han influido, entre otros, la política monetaria restrictiva y la alta tasa de encaje legal (CEPAL 2003), la cual exige un alto margen de intermediación por parte de la banca. En el caso de Costa Rica, los altos márgenes se deben a los aprovisionamientos a que se ven obligados los bancos estatales. Por su parte, los bancos privados costarricenses aprovechan la oportunidad de obtener elevadas utilidades sin perder competitividad en el sistema.

Cuadro 2-5

TASAS DE INTERÉS REALES*(Porcentajes)*

País	Tasas activas reales		Tasas pasivas reales		Margen de intermediación	
	1997-2001	2002	1997-2001	2002	1997-2001	2002
Costa Rica	13,7	18,4	7,2	7,6	6,5	10,8
El Salvador	10,5	4,4	6,5	0,9	4,1	3,5
Guatemala	11,5	10,1	1,6	3,5	10,0	6,6
Honduras	14,6	14,8	5,4	5,8	9,1	9,0
Nicaragua	23,4	25,5	9,3	9,4	14,1	16,1
Promedio Regional	14,8	14,6	6,0	5,4	8,8	9,2

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CMCA (2002).

La inflación promedio en la región alcanzó en el 2002, el 6,4%, una cifra modesta que está sólo a 0,4 puntos sobre el parámetro establecido por los gobiernos centroamericanos como punto máximo. Sin embargo, se observa que Honduras (8,0%), Guatemala (6,5%) y Costa Rica (10,0%) tienen dificultades para bajar sus niveles inflacionarios de este parámetro. Nicaragua alcanzó niveles del 5,0% y El Salvador muestra una inflación del 2,5%. Los resultados son muestra de estabilidad, congruente con una mayor disciplina fiscal y monetaria que contrasta con la década de los ochenta.

2.5 Sector financiero

Durante la década de los años noventa, las reformas en el sector financiero en la región centroamericana, fue uno de los objetivos más importantes dentro de los programas de ajustes estructurales, especialmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En estos países la liberalización de las tasas de interés y la reducción de los encajes estuvieron acompañadas por la modernización de la legislación y regulación bancaria. Un elemento importante ha sido que los países han trabajado en la creación de bancos centrales con una mayor autonomía y dando un carácter más técnico e independiente de los círculos políticos (Camacho *et. al.* 1999).

Respecto al sistema bancario (cuadro 2-6), a finales del 2002, la región centroamericana contaba con 107 bancos cuyos activos totales ascendían a 30.133 millones de dólares. Entre los países, existen diferencias significativas dentro de su estructura financiera. El sector bancario en El Salvador se caracteriza por ser manejado por un pequeño grupo de bancos relativamente grandes y eficientes, mientras que en Guatemala el sector está constituido por un gran grupo de pequeños bancos, con los cuales se dificultan las posibilidades de alcanzar economías de escala que les permita un funcionamiento más eficiente. Además, Guatemala sufrió durante los últimos años, serios problemas con la quiebra de varios bancos generando altos costos para el país.

Entre los cinco bancos más grandes de la región se encuentran dos bancos públicos de Costa Rica (el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica) y tres bancos privados de El Salvador (el Banco Agrícola, el Banco Cuscatlán y Banco Salvadoreño).

Cuadro 2-6

INDICADORES DEL SECTOR BANCARIO (DICIEMBRE, 2002)*((Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su línea))*

Indicadores	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Total
Bancos	21	12	48	20	6	107
Activos <i>(millones de dólares)</i>	7 678	8 775	7 396	4 355	1 929	30 133
Crecimiento anual activos (%)	11,7	3,7	12,1	8,4	8,6	8,9
Activos / PIB (%)	46,9	62,8	36,1	68,2	76,3	50,5
Mora financiera (%)	2,8	3,2	10,9	15,8	3,7	7,3
Margen de intermediación (%)	9,2	7,7	7,3	11,7	11,3	9,4
Eficiencia financiera (%)	5,9	3,0	5,0	5,8	4,2	4,8

Fuente: CMCA (2002).

En la región se observa una tendencia hacia la consolidación del sistema bancario. Grupos centroamericanos como BAC, LAFISE y CUSCATLAN, han ido adquiriendo una mayor presencia dentro de la banca regional. Estos grupos, y otros de origen nicaragüense, salvadoreño y guatemalteco, han realizado adquisiciones parciales o totales y algunos han creado alianzas en otros países centroamericanos. La presencia de la banca extranjera también ha generado una presión competitiva en la región. En todos los países, excepto en Nicaragua, se ha visto la aparición de grupos extranjeros como el Citybank, Scotia Bank, o Bancrecen.

III. Microfinanzas en Costa Rica

3.1 El sector de las microempresas en Costa Rica

El sector de las MYPE desempeña un papel importante en Costa Rica. Este sector en conjunto, representa el 97% del parque empresarial total del país. Dentro de él, la microempresa representa casi el 80% y la pequeña casi el 20%. La porción de la pequeña empresa en el sector es la más alta de Centroamérica. Esto se ilustra con el hecho de que en Costa Rica el 38% del empleo no agrícola está ubicado en micronegocios, mientras que la media regional es casi la mitad (Arroyo y Nebelung 2002).

Costa Rica es el país de Centroamérica con el mayor peso del sector moderno (29%) y de los sectores de mayor potencialidad (39%, mientras eso corresponde al 29% en la región). Este país muestra una estructura más igualitaria en cuanto a los ingresos del estrato moderno y a los de subsistencia. Merece especial atención que el trabajo familiar se torne cuantitativamente poco relevante y además que las MYPE de Costa Rica mantengan una menor participación de la mujer (sólo el 33% están bajo el mando de mujeres). Relativamente, estos micronegocios no agrícolas representan un alto nivel de escolaridad, son menos pobres y más rurales -la mitad- (Arroyo y Nebelung 2002).

En el cuatrienio 1994-1998, estas empresas generaron el 64% de los nuevos empleos no agrícolas. Las micro y pequeñas empresas representaron el 42% del empleo total del país y un 54% del empleo no agrícola.

Se ha estimado que, en el caso de las pequeñas empresas, el 19% son informales. Esto, que para las microempresas aumenta hasta un 53%, de lo cual resulta que casi la mitad de las MYPE en Costa Rica son informales. Podría ser que las cifras oficiales relacionadas con ellas subestimaran el fenómeno (ILO 2001).

El estudio más reciente sobre las necesidades y los problemas de las MYPE costarricenses, reveló que la competencia, los impuestos y elevadas cargas sociales son los problemas más mencionados (cuadro 3-1). Un segundo conjunto de problemas son los financieros, tales como las altas tasas de interés y los de acceso al crédito. Para la pequeña empresa, las tasas son más problemáticas, mientras que para las micro, el obstáculo financiero es el acceso al crédito (ILO 2001).

Cuadro 3-1
PRINCIPALES PROBLEMAS FINANCIEROS SEGÚN TAMAÑO
(Porcentajes)

	Micro	Pequeña
Problemas de acceso al crédito	13,2	10,2
Altas tasas de interés	11,3	19,2
Falta de capital de trabajo	9,6	4,1

Fuente: ILO, 2001

Además, para el 20,4% de las MYPE, una de las principales soluciones será mejorar las condiciones de acceso al crédito. Hay consenso sobre el hecho de que el crédito es indispensable en los estratos más bajos de la pirámide empresarial: la subsistencia y la acumulación simple (Arroyo y Nebelung 2002). De todos modos, en Costa Rica no existe un sistema de información tan detallada sobre las realidades de las MYPE como la hay, por ejemplo, en El Salvador. Los únicos estudios en Costa Rica son de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y captan un momento con una cobertura limitada. No hay cifras exactas ni estimaciones sistematizadas sobre la demanda financiera de las MYPE y sobre el porcentaje de esta demanda que está siendo cubierto.

3.2 El marco legal del sistema financiero

La supervisión financiera ha tenido cambios constantes en cuanto a su función. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) funcionó desde 1952 como departamento del Banco Central denominado como Auditoría General de Entidades Financieras y realizaba un trabajo de inspección in situ más de auditoría que de supervisión ya que generalmente se analizaba el control interno, la contabilidad y otras actividades relacionadas a una auditoría financiera. Además, para su funcionamiento dependía de la Junta directiva del Banco Central con un espacio limitado para la toma de decisiones. En 1995 la AGEF se transformó en una superintendencia con mayor autonomía y con un consejo directivo propio. Sin embargo, la SUGEF depende presupuestariamente del Banco Central, además, la Junta directiva del Banco Central se encarga del nombramiento del Consejo Directivo de la superintendencia.

La supervisión del sistema financiero incluye la banca estatal y comercial y las empresas financieras no bancarias. Además, existe una ley de la Supervisión Auxiliar la cual reglamenta y supervisa la actividad de intermediación financieras de las Cooperativas de Ahorro y Crédito con un patrimonio mayor a 1 millón de dólares. Con base en la “Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas” (1994) y la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” (1995), se contempló la facultad para la SUGEF de contar con los servicios de

un supervisor auxiliar que realizara funciones auxiliares de fiscalización en las Cooperativas de Ahorro y Crédito siguiendo un esquema determinado por la SUGEF.

En la “Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica” se introdujo adicionalmente la posibilidad de contratación remunerada de un supervisor auxiliar siempre y cuando cumpliera con los requisitos establecidos por la SUGEF. AUDICOOP, que había sido previamente autorizado por la SUGEF como supervisor auxiliar, renunció a esta actividad en febrero de 1998 debido al costo relacionado con la supervisión auxiliar y la denegación de un pago para la misma parte por parte de la SUGEF.

3.3 Evolución del sector microfinanciero

El sector financiero de Costa Rica ha mejorado considerablemente en los últimos años (cuadro 3-2). Esto es producto de un proceso de reformas legales que han otorgado mayor libertad a los entes bancarios para sus operaciones, como es la creación de nuevos instrumentos financieros, mayor participación de intermediarios no bancarios, mejor supervisión y mayor apertura de la cuenta de capitales con la flexibilidad del régimen cambiario.

La política de apoyo financiero a las empresas de menor tamaño, ha sido muy influida por la nacionalización bancaria de 1948 y por las reformas de liberalización financiera que retomaron cuerpo en 1984 (Held, 1999). El decreto de nacionalización bancaria de 1948, buscaba una democratización de los servicios bancarios y llevaba implícita la filosofía de no lucrar con los depósitos del público, lo cual implicaba un acceso provechoso para las MYPE. En aquella situación donde las diferentes distorsiones del mercado provocaban efectos acumulativos a nivel macro y microeconómico, se disminuía el nivel de ahorro y el sistema financiero estaba ampliamente reprimido. Esta conyuntura estancó la eficiencia, la innovación y la orientación del servicio al cliente (Vega y Sanabria 1995).

El primer intento de reformas financieras data de 1978, cuando se liberalizaron las tasas de interés, aunque no fue sino hasta 1984 cuando se levantaron los límites y topes sectoriales de crédito (Loría 2001). En ese año, empezaron las reformas de liberación financiera que aumentaron la rigurosidad de los bancos estatales por los antecedentes de alta morosidad y se tendió a abandonar a las empresas de menor tamaño (Céspedes 2003). El crédito del Banco Central para los bancos privados disminuyó en los últimos años: el promedio del monto prestado en el año 2002 era del 14% en relación al año 1995 (BCCR). Los bancos estatales mantuvieron la exclusividad en algunas áreas hasta fines de los noventa,¹ con el efecto de que el sector de las MYPE estuvo mal atendido durante los años ochenta y noventa (Held 1999).

En general, las tendencias de globalización y regionalización de la última época han tenido un efecto positivo en el sistema financiero. Ellas han traído más competencia dentro del sistema bancario y han ocasionado que los índices tradicionales muestren una disminución en la concentración del crédito.

Cuadro 3-2
SISTEMA BANCARIO Y PARTICIPACIÓN DE LOS BANCOS ESTATALES
(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

Año	Número total de entidades	Entidades Privadas	Entidades Estatales	Participación estatal en los créditos totales (%)
1980	9	5	4	99
1985	20	15	4	86
1990	22	17	4	76
1995	26	22	3	64
1998	25	21	3	57
1999	24	20	3	49

¹ Por ejemplo los bancos estatales tenían la exclusividad para la captación de depósitos en cuentas corrientes hasta 1996.

2001	24	20	3	40
------	----	----	---	----

Fuente: BCCR.

Sin embargo, las mismas tendencias contemporáneas también han acarreado más restricciones para las MYPE en el sistema bancario. El dinamismo en la movilización del crédito y en la generación de las utilidades, todavía se da sólo en unas pocas instituciones bancarias. A fines del 2001, los bancos estatales tenían aproximadamente el 40% de todos los préstamos formales (BCCR 2000). En general, el sistema se caracteriza por un aumento de la conformación de grupos financieros, alrededor de la figura de la banca comercial, así como por una mayor cantidad de fusiones y alianzas estratégicas principalmente a nivel del área centroamericana. Se debe tomar en cuenta que los bancos privados, en su mayoría, solamente captan los flujos internacionales y no brindan servicios locales ni ofrecen créditos a corto plazo, aptos para la pequeña empresa. Adicionalmente, el papel del dólar estadounidense en los créditos está creciendo; por ejemplo, el ahorro se dolariza en cuanto se estima que dos terceras partes de los créditos de los bancos privados son en dólares estadounidenses (EIU 2002). Por todo esto, en tanto el sistema financiero se profesionalice, será más difícil para las MYPE tener acceso a él.

Aparte de que las MYPE tienen dificultades para entrar al sistema formal, existe una inflación de alrededor del 13% anual y las tasas de interés son altas por causa del déficit fiscal del gobierno, el cual presiona las tasas de interés al competir junto con los demás agentes económicos por los fondos disponibles en el mercado de dinero (El Financiero 2003). Debe destacarse que las principales desventajas del sector bancario son todavía los recursos financieros y la tecnología; el manejo de la información es clave para un mejor desempeño (BCCR 2000).

3.4 La oferta de los servicios microfinancieros

a) Actores claves del segundo piso

Programas especiales: A pesar de la escasez de la oferta, el gobierno reconoce que el sector financiero desempeña un papel importante en el desarrollo de las MYPE y uno de los retos en el Plan Nacional de Desarrollo es: “Facilitar el acceso al crédito a pequeños y medianos productores mediante nuevos mecanismos financieros que ofrezcan condiciones adecuadas y oportunas.” (Mideplan 2002). Sin embargo, no hay programas nacionales y solamente existen programas de nivel institucional.

El gobierno creó por decreto en 1999, el Sistema de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SIAMPE), para integrar las actividades y los recursos, lo cual marcó un nuevo rumbo para la política pública de apoyo al sector. El SIAMPE tenía dos entidades: el Consejo Superior de Apoyo a las MYPE (CONSUMPYE) y el Fondo Financiero de Segundo Piso (FONAMYPE). El FONAMYPE gestionó y obtuvo fondos a fin de orientarlos hacia las MYPE recurriendo a bancos y agentes de primer piso y proveer recursos para el desarrollo de sistemas de información y el financiamiento parcial de actividades de capacitación y asistencia técnica. El SIAMPE ha asignado un activo papel a los bancos comerciales públicos (Held, 1999). Hace poco empezó una segunda etapa del programa, con un enfoque más orientado a las grandes MYPE.

El Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) tiene un Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), cuya finalidad es la de apoyar al empresario costarricense para aumentar su capacidad de competencia. Le ofrece información sobre la oferta de crédito, las opciones para colocar recursos excedentes y otros servicios no financieros.

Fondos de segundo piso. En el segundo piso hay fondos de garantía y líneas de crédito. La Red de Fundaciones Privadas de Suiza y América Latina FUNDES, dirigió uno de los más importantes programas de garantía para compartir los riesgos del crédito con las pequeñas empresas, pero dejó su acción hacia las MYPE por cambios en su política. A fines del 2002, solamente mantenía un programa:

"Servicio de acceso a financiamiento para empresas con planes de crecimiento", cuyo propósito era ofrecer capital de riesgo a las empresas nacionales con buenas perspectivas pero escasas de capital. Prácticamente esto significa que ya no están enfocadas las MYPE.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han puesto a disposición líneas de crédito con tasas de interés de mercado, para micro, pequeñas y medianas empresas. El BCIE aportó en 1999, 63 millones de dólares tanto para bancos privados como para públicos y ONG, de los cuales 35 millones de dólares correspondían al programa PROMYPE. En 1993 el BID dio 10 millones de dólares para una línea de crédito de los cuales menos de la mitad (4,8 millones de dólares) había sido desembolsada en cinco años. Los programas apenas alcanzaron a las MYPE y sólo un banco privado hizo un uso adecuado. Las agencias notan que para Costa Rica, como país más desarrollado de la región, es cada día más difícil obtener un préstamo de estos bancos internacionales destinado a una línea de crédito dirigida a las MYPE.

Otro ejemplo del segundo piso, donde se obtienen préstamos para líneas de crédito para las MYPE, es OIKOCREDIT, que dirige sus fondos a intermediarios tales como cooperativas (COOCAFE), ONG (ACORDE) y asociaciones (APIAGOL).

Los fideicomisos. En Costa Rica, una forma típica de manejar créditos hacia el empresario importante, son los fideicomisos. Es un sistema en donde el Estado o cualquier otra institución pública o privada, traspasa al ente fiduciario, fondos obtenidos a través de otros Estados o de organismos internacionales mediante empréstitos o donaciones, para ser destinados a diferentes sectores, relacionados con la producción y el desarrollo económico nacional. Es importante destacar que el ente fiduciario desempeña el papel del administrador. El fideicomiso es un instrumento que facilita la concertación entre el sector público y la sociedad civil y tiene un potencial enorme para el desarrollo del sector MYPE (Sequeira 2000). Un ejemplo es el Fondo Nacional de Garantías para el apoyo de MYPE, creado en 1996 encomendado al Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Este banco es una entidad bancaria estatal, consolidada, que tiene uno de los mayores patrimonios de Centroamérica. PRONAMYPE² apoya a la relación de las ONG con el Banco Popular y canaliza crédito a través de las organizaciones intermediarias orientadas hacia las MYPE seleccionadas (Held 1999).

b) Actores clave del primer piso (las intermediarias microfinancieras - IMF)

En Costa Rica hay cuatro formas de instituciones que ofrecen microcrédito directo a las MYPE. Estas son: a) los bancos (estatales y privados); b) las cooperativas y asociaciones; c) las organizaciones no gubernamentales; y d) una variedad de actores informales. De éstos, solamente los bancos y una parte de las cooperativas están bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Entre estas entidades se pueden mencionar tres bancos estatales, 18 bancos privados, dos bancos formados por leyes especiales (el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco Hipotecario de la Vivienda), 12 empresas financieras no bancarias, 26 organizaciones cooperativas de ahorro y crédito, cuatro mutuales de ahorro y préstamo de vivienda y la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores. Las ONG y obviamente las informales, están fuera de la regulación y por lo tanto, es difícil ubicarlas. Por otra parte, la SUGEF no solamente supervisa, sino que también por ejemplo, da acceso a información esencial sobre los solicitantes de crédito. Este servicio, que es importante para disminuir el riesgo de morosidad, es también ofrecido por el Registro Público y empresas privadas como Teletec y Datum. Aun así, para las entidades reguladas sigue siendo más fácil acceder la información.

2 Un programa que funciona por medio del Fideicomiso 02-99 MTSS PRONAMYPE /Banco Popular.

Sector bancario. El sector estatal desempeña un papel importante en el área microfinanciera. Los bancos del Estado, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Popular (BP), se benefician con condiciones favorables respecto de sus competidores privados, ya que cuentan con la garantía y la más completa cooperación del Estado. Sin embargo, se puede notar que las carteras crediticias de los bancos estatales, por estar enmarcadas dentro del papel social, son las más sensibles. De las colocaciones del sector bancario en su totalidad, el 42,3% de la mora legal mayor a 90 días, corresponde a los bancos estatales, el 21,2% a los bancos creados por leyes especiales y sólo un 19,7%, a los bancos privados (BCCR junio 2002).

Dentro del BNCR se creó en 2001 el departamento Banco Nacional de Desarrollo (BN Desarrollo) mediante la fusión de tres programas: MYPE, Juntas Rurales y Mediana Empresa. Este departamento maneja una cartera de 100 millones de dólares dirigida al sector de la MYPE y mediana empresa, incluyendo el sector agropecuario. Según los datos obtenidos el 30 de junio del 2002, el 32% de la cartera estaba colocada al sector agropecuario y un 53% a las MYPE (Briceño, 2003). Cabe destacar que el programa de Juntas Rurales de Crédito (Cajas Rurales) ha existido desde 1937 y era la más exitosa institución dedicada a canalizar créditos a pequeños productores agropecuarios. Este crédito representaba más de la mitad de la cartera del BN Desarrollo, sin embargo, a inicios de los años setenta, por un ambiente de alta inflación, las Juntas se debilitaron. Con los programas de ajuste estructural, el sector agropecuario se estancó aun más y en los años noventa, las Juntas Rurales estaban prácticamente desmanteladas. Desde 1999, el BNCR maneja explícitamente una línea de crédito para las MYPE, que también está dirigida por el BN Desarrollo y tiene un enfoque más urbano (cuadro 3-3) con 19 oficinas, de las cuales un 42% está en la capital.

Cuadro 3-3

LA LÍNEA DE CRÉDITO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE) DEL BANCO DE DESARROLLO

Características	Micro	Pequeña
Empleados hasta	5	30
Ventas hasta	USD 75 000	USD 250 000
Otros ingresos	Sí, de otras fuentes	Exclusivamente de la actividad
Experiencia	Conocimiento demostrable	2 años de operación
Condiciones de los préstamos		
Monto máximo	\$ 37 500	\$125 000
Plazo Máximo	Operación: 1,5 año Inversión: 5 años	Operación: 1,5 año Inversión: 5 años
Tasa de interés	25%	25%
Actividades	Industria, comercio, servicios, artesanías	Industria, comercio, servicios, artesanías

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica 2003

El banco concentra actualmente un 40% de su cartera crediticia en la capital del país. El 15% se distribuye en una región con alto índice de pobreza y el 45% en regiones semi rurales. A pesar de su amplia cobertura geográfica, el Banco Nacional no constituye la principal fuente de financiamiento en las zonas rurales. Los elevados costos de transacción implícitos en su gestión, aparecen como una de sus principales debilidades frente a intermediarios privados formales e informales. El crecimiento de la banca privada en las zonas rurales es un fenómeno reciente y ha sido lento porque la carencia de una red bancaria regional resulta cara (Loría 2001).

Los demás bancos estatales (el Banco Popular, el Banco de Costa Rica y Banco Crédito Agrícola de Cartago) también manejan programas para las MYPE, iguales al del BN Desarrollo del Banco Nacional, aunque algunas se enfocan más a las actividades agrícolas. Los bancos estatales están claramente en un proceso de profesionalización de las líneas y tienen la gran ventaja de que sus principales actividades (experiencia) se concentran en el manejo de los créditos.

Los bancos privados no han entrado en forma considerable en el negocio microfinanciero, pensando que este microcrédito es poco lucrativo y tiene carácter de caridad (Wattel y Sanders 2001). Una característica sobresaliente del sector bancario de Costa Rica es que pide garantías hipotecarias y prendarias, lo cual constituye un obstáculo para las MYPE.

Cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas datan de los años cincuenta y sesenta como una rama importante. Existían dos bancos cooperativos con una cuota de acciones, servicios de auditoría y de banco *off-shore*. No obstante, ellos fueron intervenidos por la Superintendencia en 1998 por problemas de solvencia. Ahora, existen sistemas de préstamo como parte integral de sus servicios de mercadeo, ofrecen adelantos a sus miembros y venden productos a crédito. Las cooperativas de comercialización de café son muy conocidas y ejecutan un modelo relativamente maduro, debido a la protección de la legislación (Wattel y Sanders 2001).

Hoy existen alrededor de 126 cooperativas de ahorro y de crédito, de las cuales 26 son controladas por la Superintendencia. Las cooperativas desempeñan un papel importante en las áreas rurales. Las cooperativas, como el sector bancario, presentan un alto grado de concentración ya que las tres más grandes concentran el 43% de la cartera crediticia. El sistema se endeudó aceleradamente en los últimos años y el sector confrontó varios problemas en el área de gestión de tesorería, por concentración de información y poder, por ausencia de monitoreo gerencial y por el grado de lealtad del asociado hacia su cooperativa. En el área rural, las cooperativas de ahorro y crédito y sistemas no especializados como los proyectos y fundaciones, todavía dominan las microfinanzas.

Las cooperativas han traído dinamismo a los servicios financieros rurales con productos tales como la tarjeta y servicios bursátiles y con carteras diversificadas cubriendo varias actividades. Mientras tanto, la solvencia y la imagen del sector están deterioradas y las cooperativas cubren menos de una cuarta parte de la población en las zonas rurales y semi rurales, su papel está disminuyendo seriamente (Loría 2001). La morosidad de las cooperativas es una de las más altas del sector financiero, especialmente en comercio (25%), transporte y comunicaciones (26%), turismo (31%) y construcción (64%).

Organizaciones no gubernamentales (ONG). El surgimiento de las ONG dedicadas al microcrédito en Costa Rica, data de principios de los años ochenta. Este surgimiento va ligado al apoyo ofrecido por los organismos de cooperación internacional a nivel latinoamericano. Esa época se caracterizaba por un énfasis en los procesos de vinculación de los micro y pequeños empresarios a la banca formal y la prioridad no era necesariamente el fortalecimiento de las intermediarias financieras sino el acceso al microcrédito. Por otra parte, en esta época no se contaba con la tecnología en microfinanzas disponible en la actualidad y el tema de la autosostenibilidad se planteaba como un reto.

A finales de la década de los años ochenta y principios de los años noventa, en Costa Rica se realiza un fuerte proceso de formación de técnicos en microcrédito, promovido por un programa de la AID, y por la Academia de Centroamérica. Este proceso culminó con algunas publicaciones sobre el tema de microcrédito y algunos estudios sobre el sector en Costa Rica. A mediados de los años noventa, los principales organismos de apoyo a los programas de microcrédito deciden retirarse del país, por considerarlo no prioritario y abandonar el apoyo al sector. Este proceso coincidió con la creación de un fondo de fideicomiso para apoyar al sector y con la definición de márgenes de intermediación para las organizaciones no gubernamentales en cinco puntos. Por lo demás, los fondos destinados por la AID para apoyar al sector pasan a formar parte de una institución local denominada Asociación Costarricense de Organizaciones de Desarrollo (ACORDE), la cual operaba en ese momento a nivel de segundo piso. ACORDE, comienza a exigir ciertos estándares que el sector difícilmente lograba cumplir. Estos hechos, ligados a que las organizaciones no habían logrado su consolidación, traen como consecuencia que los logros alcanzados por el sector microfinanciero comiencen a perderse, se estanque el desarrollo de las instituciones y se presente la quiebra de muchas de ellas.

En Costa Rica existen hoy no más de 30 ONG que ofrecen microcrédito a las MYPE. Aunque estas ONG fueron diseñadas en los últimos años para trabajar con microempresas, la experiencia ha demostrado que no han logrado consolidarse como el brazo financiero del sector microempresarial. Las más conocidas por sus líneas de crédito, según el SIEC, son ACORDE, ADESTRA, ADRI, Credimujer, FINCA, FOMIC, Fundación Mujer, FUCODES. Gran parte de las ONG (16) se integraron en una red en el año 2002, Red Costarricense de Organizaciones de Microfinanceras, REDCOM, con el objetivo de representar al sector e influir en sus políticas y brindar servicios a los miembros. La red vincula a diez mil MYPE, tanto rural como urbana, de las cuales aproximadamente la mitad son de mujeres y manejan una cartera de más de 20 millones de dólares.

ACORDE funciona desde 1987 y es una de las más grandes IMF enfocada al área urbana, con 30 trabajadores de los cuales 10 son funcionarios. En 1992, se abrió una línea de crédito para las cooperativas de ahorro y crédito; en 1993, para la pequeña empresa; y en el año 2001 se inició formalmente una línea para la microempresa. En el 2001, tenía un patrimonio de 11 millones de dólares y una cartera de crédito de 10 millones de dólares. La mitad de la cartera estaba prestada al sector, los sectores de comercio y de servicios recibían ambos aproximadamente un 20% y el resto se distribuía entre el sector agropecuario y el social. En el año 2001, los préstamos crecieron en un 29% y el número de clientes en un 38%. La mayoría de sus fondos provenían de USAID, pero ahora vienen del BCIE, el BNCR y una parte de Oikocredit. Se ofrecen entre otros, crédito para capital de trabajo e inversión, descuento de facturas, cartas de crédito y garantías de participación. Se cobran intereses conforme al mercado (27-29%) y se pide una comisión de 3-6% anual. En este momento, se está expandiendo hacia una oferta de crédito más completa con funcionarios entrenados en consultas no financieras (Acorde 2002).

FINCA, la cual está fuera de la REDCOM, creada como fundación sin fines de lucro en 1984, es una de las más antiguas de las que operan en el área rural. Aunque se empezó con ahorros obligatorios, se llegó a la conclusión de que esto era un obstáculo y actualmente existen cuatro tipos de ahorro y se mantiene un enfoque en los ahorros. El primer paso en el esquema de FINCA es la selección de una zona con necesidades de financiamiento. Se da una charla a la comunidad para que se cree un banco comunal, abreviado como Bancomunal. En la actualidad, se busca concentrar las actividades en micro y pequeños empresarios rurales. Para los miembros hay ventajas en los bajos costos de transacción y en el poco papeleo que demanda. Más de 170 bancos están activos con una cartera de crédito total de 1,1 millones de dólares. Los bancos de FINCA se concentran en dos regiones y cada uno tiene más o menos 25 miembros con un monto promedio de unos 600 dólares (Loría 2001). En los años noventa, FINCA tenía la mayor presencia de todas las ONG en las zonas rurales; no obstante, tenía problemas para obtener fondos para hacer frente a una demanda creciente y a la ampliación de su cartera de Bancomunales.

FUCODES es una asociación de empresarios con fuerte motivación social, para fortalecer las MYPE mediante la capacitación y la consecución de créditos. Creada en 1973, ya tiene más de 200 asociados. Se diferencia de las otras ONG en que los asociados realizan aportes mensuales, que son deducibles de la base imponible del impuesto sobre la renta. El resto de los fondos viene del BID y del Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PRONAPYME). La cartera en el 2002 era aproximadamente de 280 millones de colones, manejada por 10 funcionarios y estaba prestada a mujeres, hombres y grupos; estos últimos representan el 10-15% de la cartera. Un 40% de los préstamos es rural. En total se presta a 230 clientes con una tasa de interés del mercado (25-27%). Se informa que las posibilidades de determinar las tasas y condiciones del crédito son limitadas porque los préstamos para sus líneas de crédito ya vienen con sus requisitos. FUCODES da seguimiento al crédito y también ofrece capacitación sin costos, mediante alianzas, por ejemplo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El requisito más importante es experiencia. FUCODES tiene una mora legal (90 días) del 3,45%. En comparación con las otras ONG, denota que sus servicios son más accesibles, pues se piden menos requisitos. FUCODES todavía no es miembro de la REDCOM.

En general, en Costa Rica, las diferencias entre las ONG son iguales a las comunes en los demás países; entre ellas, los detalles de los perfiles de beneficiarios (tamaño, sectores, género), el enfoque regional, la rigurosidad de requisitos, la actitud hacia el mejoramiento de la morosidad y las tasas de interés. Las tasas de interés fluctúan entre el 21% del Banco Popular para crédito no agropecuario y el 42% de la ONG CREDIMUJER para el inicio de una empresa.

La mayoría de los préstamos están enfocados a las MYPE que ya tienen experiencia y, en general, se realizan los préstamos para capital de trabajo, con un plazo de 12 meses. Hay unos que están enfocados tanto a las zonas rurales como a las urbanas, pero no está claro cómo es la distribución. Los últimos años se caracterizan por una tendencia hacia servicios personalizados, en tanto que antes se buscaba a los clientes a través de capacitaciones. Ahora, el servicio es más costoso, los requisitos son más flexibles que los requeridos por los bancos y básicamente, se pide experiencia y una buena idea sobre el uso del dinero. Teóricamente, las ONG pueden pedir prestado al Banco Nacional, que tiene su programa con una tasa del 10%; sin embargo, con su clientela, es casi imposible mantener una línea así y la mayoría presta dinero de los fondos internacionales, como el BCIE. Una gran inconveniencia de las ONG es que la variación de los productos financieros es muy leve. Hace falta una diversificación de los servicios: el cliente solicita créditos a las ONG, pero realiza otras transacciones en otras entidades. Una causa de esto es que las ONG están limitadas por ley, en tanto que no pueden recoger ahorros. Otra razón, es que a ellas les faltan tecnologías apropiadas y, como resultado, las ONG compiten con un solo producto, limitando el proceso de especialización. Mientras los intereses de los fondos internacionales aumenten para Costa Rica y mientras los que presten a las ONG exijan sistemas más sostenibles, su papel en microfinanzas será cada día más difícil.

Informal. La competencia principal de las ONG son las instituciones informales, las cuales siempre han desempeñado un papel importante aunque existe poco conocimiento sobre ellas. Debe tomarse en cuenta que a partir de 1948, la banca nacional ha desplazado los sistemas informales de crédito. No existe información sobre los prestamistas particulares ni otras formas familiares enfocadas particularmente a las MYPE. Prestamistas, amigos y parientes constituyen las principales fuentes de financiamiento de la microempresa rural (Loría 2001). En las áreas urbanas hay, por ejemplo, comercializadoras privadas e industrias que ofrecen posibilidades de aliviar problemas de liquidez; los más conocidos son los sistemas de las comercializadoras, como “El Verdugo” (cuadro 3-4). Ellas venden electrodomésticos a crédito: el cliente define el período de crédito, lo cual determina el interés cobrado, se suman los intereses totales y el precio neto; el cliente paga, en el momento de compra, 1/13 del total y cada uno de los meses siguientes, un duodécimo de lo que resta. Desde hace más o menos cinco años es obligatorio hacer constar las cuotas en la etiqueta del producto.

Cuadro 3-4
TASAS DE «EL VERDUGO» COBRADAS POR PRODUCTO SEGÚN PERÍODO
(En porcentajes)

Período de	Producto A	Producto B	Producto C
0	0	0	0
12	98	104	101
18	69	73	71
24	53	56	54
36	40	42	43

Fuente: Entrevista personal.

Otra forma de microfinanciamiento es el sistema de los “polacos”, que no se dirige a las MYPE, sino a las familias. El sistema se origina en los años 30, ellos son pequeños comerciantes que compran al por mayor, electrodomésticos y artículos para el hogar en general y los venden casa por casa con una alta ganancia, independientemente del tiempo. Cobran cuotas semanales preestablecidas comparables con las de “El Verdugo”. Los polacos no piden ningún requisito y la única garantía es la dirección. Lo interesante es el grado de confianza que persiste entre vendedor y

cliente. Existe la idea de que la recuperación del capital es muy alta. Otra forma muy común y con poco fracaso para comprar al crédito, son las pulperías, aunque prestan a un plazo muy corto (dan mercadería a crédito), ellas no cobran extras. En el cuadro 3-5 se presenta un resumen de la oferta financiera del BN Desarrollo y la red de las ONG.

Cuadro 3-5
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y VARIABLES RELEVANTES

(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

Instituciones financieras	Característica general	Clientes MYPE (en miles)	Valor Activos (millones de dólares)	Cartera crediticia* (millones de dólares)	Crédito promedio (dólares)	Eficiencia operativa
Banco Nacional de Costa Rica	Programa MYPE (BN Desarrollo)	21	Nd	100	4,700	Nd
REDCOM	Red de 16 ONG especializadas en microfinanciamiento	10	Nd	20	2,00	Nd

Fuente: Construcción propia con base en investigación de campo.

Nota: Eficiencia esta definida como costo de intermediación en relación con el total de sus activos; * se refiere a la cartera dirigida al sector de las MYPE.

3.5 Cobertura del sector

No existe información formal sobre la cobertura de microcréditos para las MYPE, por lo tanto, el enfoque más detallado que existe, se refiere al crédito del sector privado y específicamente al comercial. En sólo 10 años, el monto que los bancos facilitaron en créditos de consumo se multiplicó 20 veces, al pasar de 50 millones de dólares en octubre de 1992 (la décima parte del total prestado), a 1,000 millones de dólares en octubre del 2002 (la cuarta parte del crédito total) (Leitón 2003). En términos reales,³ entre el 2001 y 2002, el crédito al sector privado por parte del sistema bancario nacional, creció en un 15%. Durante el 2002, el saldo promedio total de crédito al sector privado, fue de 7,300 millones de dólares (Céspedes 2003). Un factor que influye en los montos, es que los costos de producción son los más altos de la región; también existen varios factores que están impulsando el crédito al sector privado: a) El aumento del papel de los bancos privados; b) El poco crecimiento de los ingresos en los últimos años y la esperanza de que la situación mejore y se pueda pagar la deuda pronto; c) Factores culturales. “Es muy evidente que los ticos han cambiado los hábitos de consumo” según la socióloga Monserrat Sagot (Leitón 2003); y d) La colocación de tarjetas de crédito y la facilidad con la cual se las obtiene. Se ha pasado de usar el crédito del vendedor a usar el de la tarjeta.

Una investigación de la Universidad de Costa Rica, realizada en 933 MYPE en el 2001, sobre las características de las empresas que exportan y las que no exportan, indicó que aproximadamente el 40% utilizan créditos y lo hacen igualmente para capital de trabajo y para capital de inversión.

En relación con la región, se observa que Costa Rica cuenta con pocas ONG. En 1997, se estimó un total de 130 millones de dólares en programas con recursos externos para la microempresa. De ese total, las ONG manejaban sólo el 9%, lo que indica su poca competitividad frente a otros intermediarios como cooperativas de ahorro y crédito y bancos privados (Soto 1998).

3.6 Captación de ahorros

Como en toda la región, una cultura de consumo y un ambiente de poco apoyo, así como una alta inflación, disminuyen la tendencia de las MYPE a ahorrar y al mismo tiempo, las instituciones financieras no ofrecen muchas opciones para hacerlo. Con excepción de los bancos, los actores

³ Al descontar la inflación de un 10%.

financieros no pueden captar los ahorros del público. Sus financiamientos vienen de préstamos con instituciones internacionales como el BID, el BCIE, u Oikocrédito, o de fondos nacionales como PRONAPYME. En pocos casos, los fondos para el crédito provienen de la rentabilidad de los propios. Por esta razón, la captación de los ahorros en el sector no bancario es importante porque hasta el momento, en Costa Rica, la mayoría de las MYPE no son clientes de los bancos y dependen de las cooperativas, las ONG y las entidades informales.

“En Costa Rica, en vista de severas limitaciones legales, la movilización del ahorro de los clientes es un tema complejo. Al negársele la posibilidad de movilizar ahorros, se reduce la viabilidad de los programas y se excluye al cliente del acceso a las facilidades de depósito un servicio importante” (González-Vega 1995b).

3.7 Potencial y limitaciones del sector microfinanciero

El desarrollo de las microfinanzas en Costa Rica ha sido limitado si se relaciona con el crecimiento que ha tenido en los otros países de Centroamérica. Después de importantes avances logrados hasta la mitad de los años noventa, el sector microfinanciero se estancó. Debido, entre otras cosas, a la falta de apoyo de la cooperación internacional y a las exigencias de los proveedores de recursos en términos de márgenes de intermediación, muy inferiores a los costos operativos de las organizaciones dedicadas al microcrédito.

Costa Rica es uno de los países de Centroamérica en donde la banca estatal sigue teniendo una importante participación en el mercado financiero y por otra parte, existe el banco de los trabajadores; estas circunstancias hacen que el país ofrezca mejores alternativas de financiamiento para consumo y para acceder al crédito en general, que los otros países de Centroamérica, especialmente, por medio del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Banco Popular.

Los problemas actuales del microfinanciamiento en Costa Rica son el escaso desarrollo institucional y tecnológico. Dentro de uno de los factores clave que explican este fenómeno está el retiro de los principales organismos de cooperación internacional entre mediados de los años ochenta y principios de los noventa. En el resto de los países de Centroamérica, el desarrollo de una tecnología microfinanciera dentro del sector bancario ha sido financiado en 100% por la cooperación internacional y, en muchos casos, el capital también es aportado por los organismos internacionales. Este proceso se comenzó a hacer en Costa Rica a finales de la década de los ochenta, pero los resultados no fueron los mismos logrados en países como Guatemala y El Salvador. Quizás otro de los aspectos que ha afectado ese desarrollo es que la evolución, en términos de herramientas y tecnología microfinanciera, se dio precisamente en los años noventa, cuando ya Costa Rica no se consideraba una prioridad para efectos de la cooperación internacional. Esta situación, en un momento cuando el sector microfinanciero no había logrado su consolidación, explica la situación que se enfrenta en la realidad y que se resume en la escasa presencia de instituciones microfinancieras, el desarrollo técnico desigual con respecto a los otros países, la quiebra de muchas instituciones y la no incorporación a la banca de tecnologías de microfinanzas. Otro fenómeno que se presenta en Costa Rica es que las organizaciones especializadas en microfinanzas a nivel internacional (ACCION Internacional, Finca Internacional, entre otras) tampoco tienen presencia en el país.

Otro de los problemas se relaciona con la reglamentación. Pocas instituciones controladas por la SUGEF ofrecen microfinanzas: los que ofrecen microcréditos no están regulados, por eso son poco conocidos y con un desempeño muy diferente.

El Banco Central está mejorando el clima para que las instituciones financieras tengan más libertad y puedan competir con los bancos estatales. En el 2000 el Banco Central redujo la tasa de

encaje para situarla en el 2% (en 1996 era del 12% para los bancos estatales y del 5,86% para los privados). El Banco Central sigue disminuyendo el margen de intermediación para beneficio de los demandantes de servicios financieros (Loría 2001). Las ONG continúan operando fuera de las regulaciones de la SUGEF, en cuanto a los tipos de préstamos ofrecidos.

La inflación, los riesgos y la devaluación, seguirán siendo parte importante del manejo financiero diario, pero también los bancos extranjeros, la integración de los mercados de fondos y la competencia van a ser parte de la vida cotidiana económica nacional. Esto significa un reto al *statu quo*. Para sobrevivir habrá que reestructurarse sustancialmente.

El otro problema es de la tecnología, tanto en el área de control como en la de los productos ofrecidos. La poca información confiable de las solicitantes aumenta los costos administrativos y de seguimiento. Las entidades informales y las ONG tienen sus ventajas por estar cerca de los clientes, pero están compitiendo entre ellas y no logran una complementación que garantice un mercado sostenible y creciente. Ni los gerentes de las mismas, ni los donantes estimulan una cooperación más adecuada que haga frente a mejores tecnologías. Hay carencia de un sistema adecuado para las garantías y problemas legales para hacerlas efectivas. También hay problemas con los empleados en cuanto que las microfinanzas requieren un servicio personalizado y humilde. El personal es poco calificado para atender al sector MYPE y cuando domina el tema, se pasa a otros sectores financieros con mejores remuneraciones y potencialidades. Sin embargo, hay una tendencia hacia un servicio más completo, con capacitaciones personalizadas, con investigación y enfocado al desarrollo empresarial.

Un grupo de las MYPE que en este momento es ignorado por las microfinanzas, son las empresas sin tanta experiencia. Credimujer es la única intermediaria microfinanciera (IMF) que ofrece crédito para el inicio de empresas. Las pocas IMF que hay, están enfocadas hacia las MYPE ya existentes. Sin experiencia, es casi imposible obtener un crédito.

La importancia del crédito en los programas de apoyo a la microempresa, tiende a aumentar. Sin embargo, es necesario prevenir un endeudamiento exagerado de las MYPE, pues esto causa efectos negativos sobre ellas mismas y sobre la economía nacional. Habrá que tomar en cuenta que la falta de fondos puede ser más bien un síntoma de otro tipo de problemas y que dar un préstamo en ausencia de una capacidad de pago suficiente, sólo llevará al fracaso (González Vega 1995a). Sobre todo, hay que tener cuidado de no sobre endeudar las empresas agroindustriales. En este momento, la deuda nacional llega al 20% de todos los bienes y servicios que produce el país (mientras que en El Salvador, por ejemplo, alcanza el 47%). Esta situación es crítica cuando pasa del 25%, aun así, no existe peligro; el Ministerio de Economía informa a la gente sobre fallas de las tarjetas y exige que tengan cuidado con su uso (Leitón 2003).

La incorporación de REDCOM a la Red de Microfinanzas de Centroamérica, en noviembre del año 2002 y las tendencias que existen a nivel regional de implementar estrategias de tipo regional, presentan una oportunidad importante para inyectar tecnología, capital fresco y energía a las intermediarias microfinancieras. También para reactivar este sector y de esta forma, lograr llenar las necesidades de microfinanciamiento de las MYPE. En este sentido, se visualiza como una gran oportunidad, el implementar tecnologías microfinancieras en la banca estatal, la banca privada y las ONG que han logrado subsistir y que cuentan con algún potencial de desarrollo.

IV. El Salvador

4.1 El sector de las microempresas en El Salvador

La definición de la micro y pequeña empresa en El Salvador contempla una dimensión laboral (número máximo de trabajadores) y una dimensión económica (ventas brutas mensuales), de tal forma que se considera microempresa a la que tiene un máximo de diez trabajadores y genera ingresos hasta de 5.700 dólares mensuales. Por pequeña empresa se entiende aquella que emplea hasta cincuenta personas y tiene ventas mensuales de hasta 57.700 dólares.

En 1998, existían en el país 469 mil microempresas y las estimaciones para el año 2000 ascendían a 552 mil microempresarios, de los cuales el 89% de éstos conduce negocios que se ubican dentro de la categoría de subsistencia (venta mensual menor a 1.725 dólares); el 7% corresponde a microempresas de acumulación simple (ventas mensuales entre 1.725 y 3.450 dólares); y el 4% a microempresas de acumulación ampliada (ventas mensuales entre 3.451 y 5.750 dólares)

Al caracterizar a las microempresas por género, se observa una fuerte participación de la mujer, estimándose que aproximadamente seis de cada diez microempresarios salvadoreños son mujeres. A su vez, se observa que las actividades desarrolladas por las mujeres se realizan a nivel de subsistencia, utilizando para su desarrollo el ambiente doméstico, lo que le permite cumplir con la función productora y reproductora. Otra característica es que su actividad se

centra en el área urbana, lo cual comprende las cabeceras municipales; aproximadamente ocho de cada diez microempresarios ubican su negocio en el área urbana. Se observa que el 19% de los microempresarios no alcanzaron ningún nivel de escolaridad, en el caso de las mujeres este porcentaje asciende al 23%.

Al analizar las microempresas y el mercado laboral, se destaca que en el país existen alrededor de 762 mil personas entre hombres y mujeres que trabajan en las microempresas, generando empleo a un tercio de la población económicamente activa. En cuanto a la participación de la mujer, ellas constituyen el 58% del empleo total generado por este sector.

4.2 Marco legal del sistema financiero de El Salvador

La autoridad monetaria le corresponde al Banco Central de Reserva de El Salvador, el cual lleva a cabo el control monetario (emisión y control del volumen de circulante), mesas de compensación (intermediario entre las entidades financieras) y le compete la labor de supervisión del sistema financiero. La Superintendencia de bancos depende del Banco Central, a su vez es la instancia que respalda el sistema de pagos (pagador de última instancia).

El Salvador es uno de los países que cuenta con una Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. Según Decreto N° 849, en enero de 2001, entró en vigencia la Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios, cuyo objeto es regular la organización, el funcionamiento y las actividades de intermediación financiera que realizan los intermediarios financieros no bancarios (Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios, 2001). Dentro de las instancias a ser reguladas se destacan las federaciones y cooperativas de ahorro y crédito que captan ahorros del público, cajas de crédito y sociedades de ahorro y crédito. A marzo del 2003, sólo cuatro bancos de los trabajadores y una cooperativa están en proceso de someterse al cumplimiento de la normativa. La normativa busca establecer una disposición uniforme aplicable a intermediarios no bancarios y propiciar un mercado, regulado, controlado y confiable. Se pretende mejorar la disciplina financiera, facilitar mayores posibilidades de expansión y promover nuevos y modernos productos financieros.

4.3 Evolución del sector microfinanciero

Durante la década de los años noventa, el sector financiero formal se manifestó como el de mejor desempeño en términos de expansión y peso en la economía nacional. Entre 1991 y 1994 se privatizaron 10 instituciones financieras, mayormente bancos que habían sido nacionalizados durante la década anterior. A finales de 1999, el sistema financiero integraba 14 bancos y sociedades financieras, con un total de activos de 9.267 millones de dólares, un nivel duplicado con creces comparado con el de cinco años atrás (Superintendencia 2003). La tendencia de concentración y aumento de escala de operaciones se evidencia en el sector financiero, dado que dos instituciones estaban en proceso de fusionarse con bancos privados. Otro banco estaba en proceso de disolución, mientras que dos se encontraban en vía de reestructuración. Los dos bancos privados más grandes del país se encuentran entre los cinco mayores del istmo centroamericano.

El rol del Estado en El Salvador ha sido fundamental para crear las condiciones que propicien el desarrollo del sector. En octubre del 2000, el gobierno de El Salvador aprobó la política para la micro y pequeña empresa, cuyo objetivo principal propuesto es fortalecer el sector para mejorar la posición en los mercados nacionales e internacionales y generar nuevos empleos (CONAMYPE 2000).

Dentro del marco de la política se diseñaron las estrategias de apoyo al sector, siendo la Comisión Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) el ente promotor y facilitador de la política nacional de apoyo al sector, asumiendo una función coordinadora, facilitadora y asesora. La política contempla el apoyo al desarrollo del sector desde diferentes ejes temáticos: fortalecimiento institucional; fortalecimiento de la cultura empresarial; fomento de la asociatividad competitiva; acceso a servicios financieros y no financieros.

Dentro de la estrategia de fortalecer el acceso a servicios financieros se han implementado varios programas, entre ellos el Programa para la Promoción de la Demanda de Servicios Financieros, en el que se cuenta con estudios sobre oferta y demanda de servicios financieros y análisis de los servicios financieros brindados por los diferentes oferentes. Además, se contempla apoyar al desarrollo de nuevos servicios financieros como son los de *microleasing*, *factoring* y seguro de crédito entre otros.

Para ampliar la cobertura de los servicios financieros a las MYPE, el Gobierno Salvadoreño implementó en el 2001 el Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR). Este sistema busca solucionar el problema del acceso al crédito de las MYPE, debido a la falta de garantías que ofrecen a las instituciones financieras, además busca mejorar las condiciones de plazo y tasas de interés a las cuales las micro, pequeñas y medianas empresas contratan los créditos. De igual manera dicho Sistema busca facilitar el acceso a participar en licitaciones públicas y privadas a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

4.4 La oferta de los servicios microfinancieros

a) Actores clave del segundo piso

Asociaciones Cooperativas afiliadas a FEDECACES. FEDECACES es una institución privada de carácter financiero con propiedad asociativa, fundada en junio de 1966, es una federación de cooperativas de ahorro y crédito, con 35 cooperativas afiliadas, una cobertura en los 14 departamentos y 90.000 miembros asociados. La federación está conformada por dos niveles, el primero está constituido por la red financiera de cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a FEDECACES, que brinda servicios financieros a sus asociados. El segundo está conformado por la corporación FEDECACES, estructurada por diferentes entidades que le brindan a sus cooperativas soporte institucional.

Desde fundación de FEDECACES hasta 1980, la actividad de las cooperativas y de la federación se limitó al otorgamiento de crédito dirigido. A partir de 1981 empezaron a impulsar un programa de transferencia tecnológica para el establecimiento de sistemas que permiten la captación, colocación y manejo eficiente de recursos internos y externos, orientándose a la promoción del ahorro como fuente alternativa de fondos frescos y sin condiciones.

FEDECREDITO. La Federación de Cajas de Ahorro y Crédito y Banco de los Trabajadores, cuenta con una trayectoria de más de 60 años, agrupa a 48 cajas de crédito que se ubican en todo el país, siete bancos de los trabajadores y 75 puntos de atención a clientes. Cuentan con una clientela de 135 mil clientes activos y una cartera activa de 70 millones de dólares. La federación actúa como una instancia de segundo piso para las cajas y a su vez, es la instancia de supervisión de las cajas y de los bancos de los trabajadores.

En cuanto a indicadores de desempeño, el resultado de las Cajas es diverso, algunas de ellas con estándares de eficiencia muy favorables y otras que requieren un mejoramiento significativo. Según datos suministrados por la gerencia de operaciones al cierre del 2002, el 10% de las Cajas (son 55 en total) no lograron cubrir sus costos operativos y financieros después de reservas. En relación a los costos operativos, el promedio de las Cajas y Bancos de los Trabajadores es de 11%.

En relación a la calidad de la cartera, el índice de vencimiento de préstamos vencidos a más de 90 días es de 8% (Cajas y Bancos).

BMI y PROGAPE. Dentro de las instituciones de apoyo creadas por el Estado y que dan soporte al sector se destacan entre otros:

- a) el Banco Multisectorial de Inversión (BMI), el cual surge en 1994 como banco de segundo piso y apoya la inversión privada como una forma de contribuir al desarrollo económico y administra, entre otros, los programas de garantías agropecuarias (PROGARA) y el Programa de Garantía de Pequeños Empresarios (PROGAPE); y
- b) FUNDAMICRO, creada en 1999 por el BMI y el Programa FOMMI II de la Unión Europea, con el fin de ofrecer servicios de capacitación y asesorías para transferir la tecnología de microfinanzas a las intermediarias financieras reguladas y no reguladas.

b) Actores de primer piso

Bancos Estatales. Las dos instituciones estatales con operaciones directas al público (el Banco Hipotecario y el Banco de Fomento Agropecuario, BFA) se encuentran en un frágil equilibrio financiero o en condiciones deficitarias. En el caso del BFA, el resultado financiero neto registrado sobre el 2001, ascendió a menos 7 millones de dólares, para el 2002 lograron una ganancia de cerca de 750 dólares como resultado de una reestructuración organizativa.

Bancos Comerciales. En El Salvador se encuentran dos bancos comerciales que son activos en el sector microfinanciero, el Banco Salvadoreño y el Banco Agrícola. El Banco Salvadoreño inició con un programa de prueba en 1998, apoyado por el FOMMI, el que dio la asistencia técnica necesaria para la implementación, partieron con una sucursal. Con el apoyo del proyecto FOMIR – DAI, financiado por la AID, iniciaron la fase de expansión en el 2001, en donde el proyecto les brindó asesoría a todos los niveles por medio de pasantías, consultorías especializadas y apoyo en el área de sistemas. Los recursos con que se financia son aportados por el banco. El Banco Salvadoreño cuenta con una cartera microfinanciera de 1,7 millones de dólares y 2.105 créditos activos. El promedio de crédito colocado ha sido de 720 dólares por crédito.

El Banco Agrícola creó en 1986 un departamento orientado a atender la MYPE. A marzo del 2003, la fuerza de ventas del Banco es de 30 banqueros y 18 agencias. Cuenta con una cartera de 60 millones de dólares y aproximadamente 6.300 clientes, de los cuales se ubican en microfinanzas⁴ 1,8 millones de dólares distribuidos entre 1.600 clientes. Las tasas de interés cobradas oscilan entre el 24 y el 34%, más el 3% anual por desembolso y el 0,2 % sobre saldos por administración de los mismos.

Cooperativas de ahorro y crédito. En las cooperativas de ahorro a diciembre del año 2002, los depósitos de ahorro alcanzaban la suma de 97 millones de dólares, el crédito externo ascendía a 4 millones de dólares, lo cual refleja claramente que la principal fuente de financiamiento son los recursos de los asociados, los que representan el 65% del activo productivo. El monto otorgado en cartera de créditos asciende a 113 millones de dólares, lo que representa el 70% del total del Activo. El monto de créditos desembolsado en el 2001 fue de 29 millones de dólares y un total de 20.000 clientes, lo cual da un crédito promedio de 1.453 dólares por crédito otorgado. Las cooperativas afiliadas a FEDECACES, muestran un crecimiento cercano al 13% en el último año, en términos de colocación de créditos. Al revisar algunos indicadores financieros de las cooperativas afiliadas a FEDECACES, se observan debilidades en el desempeño financiero según los estándares exigidos

⁴ El banco entiende por microfinanzas, a aquellas empresas que tienen ventas anuales hasta 20,5 miles de dólares y hasta 5 empleados incluyendo al propietario.

para este tipo de instituciones en aspectos relacionados con protección y activos improductivos. Los gastos operativos en relación al total de activos ascienden a 7,5%, el rendimiento por préstamos entre el promedio de préstamos netos es del 23,4% y el excedente neto entre el promedio de activos es del 3,5%.

Financieras. Entre las instituciones financieras con vocación para atender al sector MYPE se encuentra la Financiera Calpiá. Esta se origina en una asociación privada logró transformarse en una institución especializada en 1995, con una cartera con un valor de 4,4 millones de dólares, 8.100 préstamos y una cuarta parte de estos en la agricultura (Campion y White 1999). Aunque la institución sigue atendiendo a una clientela mayormente urbana, su volumen de operaciones se ha incrementado hasta lograr una cartera por un valor de 45 millones de dólares en el 2002 distribuidos entre 45 mil clientes. Entre los factores que han contribuido a la expansión de esta financiera, se consideran: la intensidad del contacto con los prestatarios, la agilidad y simplicidad de los trámites administrativos, la responsabilidad individual de los cuadros profesionales y el rigor efectivo en la recuperación (González Vega 1996).

A marzo del año 2003, Financiera Calpiá se encuentra en el proceso convertirse en un banco comercial con base en las exigencias de la Ley de Bancos. El comienzo de operaciones del banco se proyecta para la segunda mitad de 2003 y se propone dar continuidad al enfoque utilizado hasta la fecha, el cual consiste en manejar las operaciones con criterios comerciales, con un trabajo orientado a la responsabilidad social.

Organizaciones no gubernamentales. El sector de las ONG que ofrecen servicios microfinancieros, está constituido por un gran número de instituciones, de las cuales varias se han agrupado en gremios. Los dos gremios más importantes son: la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas (ASOMI) y la Red Alianza para el Desarrollo de la Microempresa.

ASOMI nace en julio de 1998, promovida por la fundación José Napoleón Duarte, Asociación Génesis y Fundación Salvadoreña Integral (FUSAI). ASOMI surge con un enfoque gremial para incidir en impulsar condiciones políticas normativas y regulatorias que fortalezcan el sector de las microfinanzas. Actualmente ASOMI tiene ocho integrantes, los cuales cuentan con una red de cuarenta y tres oficinas, una cartera activa de 23 millones de dólares y una clientela activa de 52.979 (cuadro 4-1). Del total de la clientela atendida, el 62% se ubica en el área rural y el 42% son mujeres. El monto promedio es de 429 dólares por crédito.

Cuadro 4-1
ÍNDICES GENERALES DE LA RED ASOMI
(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

Institución	Oficiales de crédito	Oficinas	Clientes activos	Mujeres (%)	Cartera colocada área rural (%)	Cartera de crédito (Millones de dólares)
Fundación Génesis	7	4	1 480	70	0	1,79
Fundación José N. Duarte	17	6	3 500	80	50	1,30
Apoyo Integral, SA de CV	74	13	18 000	60	37	9,70
FADEMYPE	10	3	1 300	77	60	0,45
AMC de R.L.	10	5	5 040	42	17	3,03
Fundación CAMPO	8	3	3 655	23	100	1,50
PROFIN-FUNDASALVA	8	3	1 399	72	1	1,00
CAM	87	6	18 605	85	77	4,00
Total	221	43	52 979	42	62	22,77

Fuente: ASOMI (datos a noviembre 2002).

ALPIMED es una entidad sin fines de lucro, integrada por diversas instituciones que trabajan con el sector de la MYPE. La asociación se caracteriza por tener instituciones que son relativamente

pequeñas, solo ASEI cuenta con una cartera mayor a cinco mil clientes (cuadro 4-2). Las organizaciones afiliadas tienen en común que su objetivo no solo esté enfocado en los servicios financieros sino también que trabajen en las áreas del fortalecimiento de la MYPE. Como plan de contingencia, las organizaciones han creado una institución especializada en microfinanzas, llamada ENLACE, que tiene como meta la especialización y a la que se proyecta trasladar sus carteras de crédito, en caso de dificultades legales para administrar sus carteras. Algunas de las asociadas a ALPIMED están valorando la posibilidad de vender sus carteras de crédito a ENLACE.

Cuadro 4-2

ALPIMED INDICADORES FINANCIEROS DE LA RED (NOVIEMBRE 2002)

Institución	Oficiales de crédito	Oficinas	Clientes activos	Porcentaje mujeres	Area rural	Cartera crédito dólares
PROCOMES	8	3	1 800	76	24	211 386
REDES	8	4	2 000	72	62	572 000
CREFAC	3	2	824	83	0	326 217
FUNSALPRODESE	4	2	823	70	60	1 388 969
ASDI	3	3	515	55	72	16 571
ASAPROSAR	15	1	3 000	85	30	400 000
BÁLSAMO	4	3	714	78	65	166 199
ASALDI	4	2	1 200	85	58	400 000
MELIDAS	7	3	524	100	40	74 300
ASEI	39	4	5 620	82	51	457 132
Total	95	27	17 020	78	46	4 012 776

Fuente: datos suministrados por ALPIMED.

4.5 Cobertura del sector

Se estima que la cartera microfinanciera en El Salvador es de 387 millones de dólares aproximadamente, en donde la mayor participación corresponde al sistema FEDECREDITO, con un 49% del monto total invertido. El sector cooperativo a través de FEDECACES asume el 29%, seguido por la Financiera Calpiá con un 11%.

En relación al número de clientes con crédito, los gremios que se muestran en el cuadro 4-3, tienen una cobertura de 255 mil teniendo el mayor nivel de cobertura FEDECREDITO con un 52%, seguido de la Red ASOMI con un 20% y Calpiá con un 17%. Si se relaciona la cobertura de los servicios en cuanto a clientes con crédito y la demanda estimada la que es de 552 mil clientes, se obtiene un nivel de cobertura de un 46%.⁵

Con respecto al nivel de profundidad, medida con relación al crédito promedio, sobresale la participación de la Red ASOMI, con el monto de crédito promedio menor (429 dólares) y la Red Alpimed con un monto promedio de (460 dólares), lo que evidencia que están llegando a los sectores más pobres de la población. Con relación a los costos de intermediación expresados como porcentaje del total de activos, los más bajos los presenta FEDECACES, con un 7,5% seguida por FEDECREDITO, que el promedio entre las afiliadas es de 10,5% y financiera Calpiá con un 12%, monto que en el sector microfinanciero es considerado aceptable.

⁵ Se debe tomar en cuenta que la demanda se estima con base en unidades empresariales y que la oferta crediticia no necesariamente va dirigida solo a este sector ya que puede incluir crédito de consumo.

Cuadro 4-3

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y VARIABLES RELEVANTES

Instituciones financieras	Característica general	Clientes activos (en miles)	Valor Activos (millones de dólares)	Cartera crediticia (millones de dólares)	Crédito promedio (dólares)	Eficiencia operativa
FEDECACES	Agrupación 30 cooperativas de ahorro y crédito	ND	161	113	1 453	7,5
Red Alpimed	Red de organizaciones que atienden la MIPYME, no se especializa en microfinanzas	17	ND	4	460	ND
Financiera Calpiá	Organización especializada en la micro y pequeña empresa. Líder en el mercado	45	57,4	45	822	12%
Red ASOMI	Agrupación 8 instituciones financieras especializadas	53	ND	23	429 ⁶	ND
FEDECREDITO	Agrupación a 48 cajas y 7 bancos de los trabajadores. Cuenta con más de 50 años de experiencia	135		190	1 400	10,5%
Banco Agrícola*	Banca privada, cuenta con un departamento especializado en micro y pequeña empresa	3,6	ND	11	3,55	ND
Banco Salvadoreño*	Banca privada. Inician expansión en 2001	2	ND	1,7	720	ND

Fuente: Construcción propia con base en investigación de campo.

Nota: Eficiencia, definida como costo de intermediación en relación con el total de sus activos.

* se refiere a la cartera dirigida al sector de las MYPE.

ND se refiere a no disponible.

En cuanto a la cobertura geográfica, en el cuadro 4-4, se muestran los puntos de servicios de las instituciones que brindan servicios de microcrédito por departamento. En casi todos los casos los puestos de servicio se ubican en la cabecera departamental, excepto en el departamento de San Salvador en donde sí hay presencia en algunos de los municipios.

Cuadro 4-4

PUESTOS DE SERVICIO PARA LA MYPE DE EL SALVADOR, POR DEPARTAMENTO

(Números enteros)

Departamento	Puestos de servicios	Departamento	Puestos de servicios
Ahuachapán	10	La Paz	11
Santa Ana	25	Cabañas	9
Sonsonate	19	San Vicente	7
Chalatenango	10	Usulután	14
La Libertad	22	San Miguel	13
San Salvador	97	Morazán	7

Fuente: Construcción propia con base en estudio de Oferta y Demanda créditos en Sector Microempresarial. CONAMYPE, San Salvador, Junio del 2001.

4.6 Potencial y limitaciones del sector microfinanciero

Un aspecto importante en El Salvador es el interés del gobierno en apoyar al sector de la MYPE. Este interés se refleja en los programas especiales para este sector, la creación de CONAMYPE y la elaboración de leyes en favor del sector microfinanciero.

La oferta microfinanciera, ha sido ampliada, tanto en términos absolutos como en variedad de productos. Un buen ejemplo de ello es la participación del sector bancario en este segmento. A su vez, esta ampliación ha resultado en un aumento significativo de la competencia entre las

⁶ El monto promedio se estima con base en el tamaño de cartera y clientes activos.

oferentes de los servicios financieros, exigiendo que las instituciones sean cada día más eficientes. Esto ha traído una disminución de las tasas de interés. Además, a través de los programas nacionales e internacionales se ha logrado un proceso de formación y se está creando una escuela que se está "autoeducando". Otro aspecto que va unido a la formación del recurso humano es el desarrollo de tecnologías propias que responden a las necesidades de los clientes. El Salvador muestra un gran dinamismo en desarrollar productos innovadores que respondan a las necesidades del mercado.

Ante los cambios del mercado, las tendencias que se visualizan se orientan a la fusión y desaparición de instituciones microfinancieras, a raíz de que los subsidios son cada vez más restringidos, la competencia es más fuerte y las exigencias del mercado mayores. La necesidad de las ONG de convertirse en instancias reguladas para poder continuar en el mercado, es una tendencia que se observará en los próximos años. Sin embargo, hasta el momento, el proceso de la regulación ha sido lento y se visualiza como un riesgo que la presión por la normativa pueda llevar a que las instituciones abandonen la atención del sector de MYPE.

Hasta el momento, las IMF se han visto limitadas en sus estrategias de expansión de servicios. Con la excepción del sector cooperativo, los servicios se han limitado a la colocación de préstamos. Además, se observa una concentración geográfica y para la mayoría de las IMF ha sido difícil ampliar su oferta hacia los sectores rurales.

V. Guatemala

5.1 El sector de las microempresas en Guatemala

En el período 1998-1999 el sector de micro y pequeñas empresas ofrecía empleo a casi un millón de personas en el ámbito urbano, según datos del Proyecto OIT-PROMICRO (Promicro 2000). En el sector rural estaban activas alrededor de 650.000 personas desarrollando actividades no agrícolas. En la década de los noventa, el empleo del sector creció notablemente, pero a costo de la productividad y remuneración laborales. El desempleo abierto se mantuvo reducido, pero el oculto y el subempleo crecieron significativamente. El empleo en el ámbito rural en actividades no agrícolas de baja productividad creció al doble de lo que hizo el empleo en su conjunto.

En el sector de las MYPE, predomina el autoempleo, las actividades de baja productividad, la baja remuneración y la escasez de mano de obra calificada. Hay una relación directa entre el nivel de preparación técnica y la inserción en el mercado laboral a términos más ventajosos. Entre la PEA empleada en el sector, los grupos más vulnerables son mujeres, niños e indígenas. Al mismo tiempo, hay una participación relativamente alta (en comparación con otros países centroamericanos) de mujeres y niños en actividades productivas. Según el mismo estudio de PROMICRO, el universo de las MYPE se estima en 1.022.000 unidades empresariales, lo cual refleja el bajo número de empleados por empresa. Más del 75% del empleo se genera en unidades empresariales de modesta productividad, confirmando que la fortaleza de las micro-empresas se materializa más por su contribución al empleo que al producto interno de la economía nacional (Arroyo y Nebelung 2002).

5.2 El marco legal del sistema financiero

El sistema financiero guatemalteco se encuentra regulado, principalmente, por la Ley de Bancos, Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria. En los últimos años, se ha iniciado un programa para modernizar y liberalizar el sector financiero con miras a promover la inversión en los sectores productivos de la economía. Este proceso culminó con la aprobación de la nueva Ley de Bancos al 1 de junio de 2002. Esta ley busca, entre otros objetivos, una mayor estabilidad y eficiencia del sistema financiero en el mediano plazo, mejorar la canalización de ahorros, así como reducir las tasas de interés y el margen financiero entre las tasas activa y pasiva.

La Superintendencia de Bancos ejerce la vigilancia y fiscalización permanente del Banco de Guatemala, de los bancos comerciales y de otras instituciones financieras. Con éstas se refiere a las sociedades financieras o banca de inversión, los almacenes generales de depósito, las compañías de seguros y fianzas y, por último, a las casas de cambio. Fuera del sistema supervisado se encuentran las empresas de carácter mercantil y las cooperativas de ahorro y crédito. También las entidades de microfinanzas se encuentran fuera del marco de regulación y supervisión. No obstante, el entorno legal para las microfinanzas no se queda estático y puede cambiarse en los próximos años, en vista de los numerosos estudios previos y asesorías realizadas. Actualmente se cuenta con una propuesta de Ley de Intermediarias Financieras no Bancarias que está en proceso de revisión por las instancias competentes en el nivel nacional.

Pese a las nuevas iniciativas de legislación, por el momento las entidades microfinancieras están seriamente restringidas para ampliar sus servicios al ámbito de movilización de ahorros. Al respecto establece el Decreto 26-99 que “comete delito de intermediación financiera toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que sin estar autorizada expresamente de conformidad con la presente ley o leyes especiales para realizar operaciones de tal naturaleza, efectúa habitualmente en forma pública o privada, directa o indirectamente, actividades que consistan en la captación de dinero del público canalizándolo a negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza”. Lo anterior implica que las microfinancieras carecen de toda facultad para gestionar sus pasivos, no solo del público en general sino también de sus clientes prestatarios. En este sentido, el régimen legal es claramente más restrictivo que en El Salvador, donde las sociedades con operaciones crediticias a micro-empresas sí pueden captar ahorros de sus clientes.

5.3 Evolución de las microfinanzas

La actividad microfinanciera en su forma actual surge en Guatemala en los años ochenta,⁷ promovida entre otros por el Programa Nacional de la Microempresa. En esa época la estrategia era aunar los esfuerzos del Estado con los de las ONG para ejecutar programas que contemplaban una mezcla de capacitación, crédito y asistencia técnica dirigida a microempresarios. El enfoque se orientaba a fortalecer actividades de manufactura y servicios, por considerar que estas generan valor agregado y empleo, dejando de lado las actividades de comercio para el apoyo financiero.

Paralela a esta iniciativa entra al país, en la segunda mitad de la década, el Programa de la ONG estadounidense Acción Internacional y se inicia con una estrategia agresiva de expansión. Esta ONG implementa sus acciones por medio de dos ONG, Génesis Empresarial en la capital de Guatemala y FUNDAP en el Occidente. Por cambio de estrategia del Gobierno, en 1991 se limita el apoyo a este sector y los fondos se orientan entonces hacia el apoyo de la banca privada, creando un

⁷ Guatemala y El Salvador son países de Centroamérica donde se mantiene hasta hoy la tradición de “cuchabal”, un grupo informal cuyos miembros se reúnen regularmente para juntar dinero y luego destinarlo en turno a un solo miembro del grupo. Esta tradición es más conocida como “tontina” en otros países en vía de desarrollo. A pesar de su carácter comunitario y potencial para el desarrollo del sector, la tradición ha recibido poca atención de los actores, tanto del sector como de organismos de cooperación.

fideicomiso en el Banco de Guatemala para que la banca privada pudiera canalizar los recursos en el primer piso.

En el transcurso de los años noventa, Guatemala experimenta un gran número de iniciativas en el área de microfinanzas, ya no solo propiciadas por organismos de origen norteamericano sino también y en creciente medida, por iniciativas de origen y con fondos europeos. En esta categoría se presentan por ejemplo iniciativas de la Cooperación Belga, seguidas por los programas de desarrollo rural de la Unión Europea en los departamentos considerados marginales del país.

De hecho, la distinción en canales de cooperación se ha ido reflejando en el nivel institucional, tanto en formas de organización, como también en tecnologías crediticias aplicadas. Las microfinanzas de “talla” norteamericana se caracterizan, en parte, por el énfasis en el desarrollo de ONG exclusivamente financieras que operen en escala mayor, sobre todo en el ámbito urbano. También se viene aplicando el modelo de los bancos comunales para apoyar el desarrollo del sector rural. En contraste, las iniciativas con fondos de origen europeo se dirigen a ONG con un toque algo más rural, a menudo en un ambiente que engloba otro tipo de acciones de desarrollo. La canalización masiva de fondos de micro-crédito de la Unión Europea se ve acompañada de la creación de numerosas asociaciones de base, sea de carácter municipal o bien según sector productivo (cooperativos o asociaciones de productores). De las asociaciones de primer grado surgen a finales de los años noventa, organizaciones cúpula de segundo hasta tercer grado, pero siempre con un carácter rural regional.

Así resulta que el sector de las microfinanzas en Guatemala ha experimentado cambios profundos, mostrando transformación, especialización y a la vez la búsqueda de estándares de eficiencia y productividad. De esta forma se acortó la brecha, con respecto a los otros países latinoamericanos, que había surgido en años anteriores. El dinamismo observado en los últimos años se ha gestado a raíz de los siguientes acontecimientos:

a) **Firma de los Acuerdos de Paz.** En diciembre de 1996, se firman en Guatemala estos acuerdos. Esto trae como consecuencia un cambio de las estrategias de apoyo al sector de organizaciones de desarrollo, los cuales se resumen en dos aspectos: a) Se fortalece la canalización de recursos por medio del sector gubernamental; y b) Se deja – al menos en papel – el enfoque “asistencialista” para remplazarlo con otro basado en la sostenibilidad, lo que crea las condiciones para iniciar un proceso de transformación del sector microfinanciero.

b) **Crisis del sector financiero formal.** Esta se manifiesta en parte, por la quiebra de instituciones financieras privadas (bancos comerciales y sociedades privadas) y por otra parte también por el receso de la banca estatal de fomento. Un reflejo es la transformación de BANDESA en BANRURAL, proceso que contó con un fuerte apoyo de la cooperación, especialmente la AID (apoyo a reformas institucionales), el BID y el BCIE (reformas institucionales y cooperación con recursos financieros). Otro elemento para contrarrestar la crisis del sector financiero es el programa de Bancos Comunales, implementado en BANCAFE.

c) **Reformas a la Ley.** Se aprueban leyes orientadas a permitir el financiamiento del sector por parte de BANRURAL, entre otros, como instancia de segundo piso, convirtiéndose en fiduciario de gran proporción de los fondos de fideicomisos en Guatemala (entre otros, los de los proyectos de la UE). Por otra parte, la aprobación del Decreto 44-2000, coloca a las organizaciones no reguladas en una posición distinta de las intermediarias formales. Esto crea un espacio propicio para que las organizaciones de microfinanzas busquen espacios para analizar las implicaciones del nuevo decreto y nuevas modalidades de operar en el futuro.

Las circunstancias señaladas permiten también la creación de la Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala REDIMIF, inscrita como ente con personería jurídica el 26 de abril del

2001.⁸ La creación de la Red marca una nueva tendencia en el sector microfinanciero en Guatemala, ya que la agremiación permite un espacio de reflexión conjunta, imposible de lograr anteriormente. La iniciativa de la Red genera sus resultados dos años después: estudios sobre la escala y el desempeño de las organizaciones, iniciativas de estándares uniformes de evaluación, propuestas de fortalecimiento del sector, elaboración de una planeación estratégica y operativa para la red y la aprobación de un proyecto para el fortalecimiento institucional.

Otra iniciativa reciente es la creación de la Corporación de Referencias Crediticias, Sociedad Anónima (CREDIREF S.A.), mejor conocida como la Central de Riesgos, como socia con la REDIMIF, BANRURAL y BANCAFE. A través de la Central, los socios comparten información sobre sus carteras y clientes. Su objetivo es reducir niveles de morosidad (mediante intercambio de referencias sobre un total de unos 200.000 clientes) y promover la cultura de pago entre los clientes de las instituciones afiliadas.

Dos iniciativas de índole supranacional se están desarrollando con participación de microfinancieras guatemaltecas. La primera es la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF), organismo que unificará las propuestas regulatorias y los programas de expansión del microcrédito en la región centroamericana. La segunda es el Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales (FORO-LAC-FR), constituido en Antigua en abril del año 2002, en el que participa REDIMIF directamente en conjunto con unas diez instituciones de otros países. Entre los objetivos que se propone el Foro están la reflexión y la investigación acerca de políticas públicas y el impacto de servicios financieros en áreas rurales. Ambas redes cuentan con un apoyo significativo de organismos de cooperación.

En Guatemala, la cooperación internacional apoya al sector microfinanciero mediante un comité asesor especializado en microfinanzas, llamado Comité de Cooperantes Internacionales para las Microfinanzas (CCMF). Se trata de un subcomité de la Mesa de Coordinación de Cooperantes Internacionales MIPYME Guatemala. Este comité cuenta con una Agenda Estratégica, que contempla las principales acciones a desarrollar y su objetivo es maximizar las inversiones, no duplicar esfuerzos e implementar una estrategia de apoyo integral al sector. El Comité es el primer paso hacia una modalidad de coordinación estratégica entre entes de cooperación, del mismo sector y del Estado, considerada imprescindible para lograr que se consoliden los servicios microfinancieros en el mediano plazo.

5.4 El rol del Estado

El tema de la MYPE forma parte de la agenda de la política a nivel nacional. Desde 1987 está funcionando el Programa Nacional de Fomento de la Micro y Pequeña Empresa y en el 2000 se creó el Viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (VIMIPYME) adscrito al Ministerio de Economía.

El Viceministerio tiene el mandato de facilitar el desarrollo competitivo de las MYPE y coordinar todas las políticas y estrategias que faciliten el desarrollo competitivo del sector. En la actualidad, se hacen esfuerzos para la formulación y validación de una agenda nacional para el fomento de la MYPE, involucrando a otros sectores económicos. En 1999, arrancó el Programa de Desarrollo Institucional y de Políticas en Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala, conocido como el proyecto BID-MINECO. El mandato principal del proyecto es el de diseñar políticas para el sector. Dentro de este espacio de coordinación se puede también señalar la

⁸ Instituciones que conforman la Red: AGUDESА, АYNLA, АСТ/FUNDEА, АSDESARROLLO, CDRO, CRS, FAFIDESS, FAPE, Génesis Empresarial, Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria (FIACG), FINCA, Fundación Micros, Fundación para el Desarrollo de Mixco (FUNDEMIX), Fe y Alegría, Fundación CRY SOL, FUNDESPE, Mentores Empresariales, MUDE y SHARE Guatemala.

elaboración de un plan estratégico para la atención del sector y una clara coordinación entre las estrategias de apoyo. Una de las actividades del proyecto en referencia, ha sido crear un Comité Asesor Nacional (CAN) para las PYME, en cuyo marco se señala la elaboración de un plan estratégico para el sector y su coordinación con otras estrategias de apoyo.

Dentro de los temas prioritarios abordados por el Proyecto BID-MINECO se destaca el anteproyecto de la Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. Este anteproyecto lo desarrolla una comisión formada por el Banco de Guatemala, la Superintendencia y el Viceministerio de la MYPE. Sin embargo, existe incertidumbre sobre cuál debe ser la instancia reguladora y hay cuestionamientos sobre si la regulación conviene o no en estos momentos, con un sector microfinanciero aun en pleno proceso de desarrollo. Hasta la fecha, el Estado no cuenta con un marco de intercambio y concertación con representantes de la comunidad cooperante e instituciones del sector.

5.5 Oferta de los servicios microfinancieros

Entre los proveedores de servicios financieros a la MYPE se ubican los siguientes actores: ONG especializadas en microfinanzas asociadas a REDIMIF, ONG de apoyo integral, cooperativas de ahorro y crédito afiliadas o no a FENACOAC, bancos privados y bancos de desarrollo:

a) Actores de segundo piso

BANRURAL, como instancia con operaciones de segundo piso, ofrece préstamos a 40 IMF. No están cuantificados los créditos otorgados por este canal según las fuentes disponibles.

Fondos de la Unión Europea, canalizados mediante instituciones de base, formadas por proyectos (ya concluidos) de desarrollo rural integral y en la línea de refugiados. Aunque la mayoría de los recursos están fideicometidos en BANRURAL, un aspecto interesante es la formación de asociaciones departamentales de desarrollo que a su vez están conformadas por organizaciones locales. En los departamentos Huehuetenango, Quiché, Totonicapán y Alta Verapaz, estas asociaciones han asumido un papel protagonista en la oferta de servicios tanto financieros como no financieros. Ello explica que la propiedad post-proyecto de los fondos provenientes de la Unión Europea (UE), que en total sobrepasan los 12 millones de dólares, es considerado como un asunto delicado. Tanto el Estado como las asociaciones han enfatizado su interés en la propiedad de los mismos en el futuro.

Programas especiales. El Ministerio de Economía, en el marco del Programa Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha impulsado el financiamiento al sector. Se canalizan recursos financieros a través de la banca y el sector de las ONG. En los últimos años, este programa ha canalizado recursos por un monto de 4 millones de dólares, a través de los proyectos especiales. Recientemente, el Vice Ministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa VIMIPYME firmó otro convenio con el BCIE para un préstamo de 30 millones de dólares. El 90% constituye un fondo fresco para canalizar créditos al sector de las MYPE, mientras que el remanente se destinará a servicios no financieros, sobre todo capacitación. VIMIPYME ejecuta también el Programa Global, creado con un fondo de 10 millones de dólares aportados por el BID. El objetivo principal de este programa es influir en los bancos según la línea de ampliación de ventanilla (“*down-scaling*”), para financiar a la micro y pequeña empresa. Este fondo es manejado principalmente por el BANRURAL y BANCAFE.

b) Actores de primer piso

Sector bancario: Históricamente su participación ha sido poco relevante para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. A finales de los años noventa, la cartera de los bancos comerciales por un total de 1.817 millones de dólares se caracterizaba por una alta concentración de préstamos grandes en áreas urbanas. Los préstamos mayores de 12.500 dólares concentraban el 88% del volumen prestado, pero solamente el 9% del número de préstamos. La poca participación se debe principalmente a mandatos legales en cuanto a la solvencia de los bancos y a los elevados costos de transacción. Sin embargo, se están produciendo cambios al presentarse tendencias a penetrar el mercado de las micro y pequeña empresa por parte de la banca formal.

BANRURAL cuenta con el Departamento de Microfinanzas, el cual se especializa en la atención de la MYPE. Los montos otorgados van desde 65 dólares hasta 13.000 dólares, a una tasa de interés efectiva entre el 22 y 32% por año. Los requisitos para acceder al crédito son: un año de operaciones, ubicación cerca de una de las agencias del BANRURAL (menor a 25 km), fotocopia de la cédula de identidad y una garantía. Las garantías aceptadas pueden ser no convencionales (bienes de alto valor, equipo, menaje de hogar). BANRURAL no excluye a grupos solidarios y bancos comunales. En grupos solidarios se trabaja con un monto inicial de hasta 520 dólares por integrante y en bancos comunales un monto inicial máximo de 260 dólares.

El banco cuenta con un sistema de escalonamiento (aumento progresivo) del crédito basado en la forma de pago y en el crecimiento de la empresa. A marzo del año 2002 la cartera activa de BANRURAL fue de aproximadamente 43 millones de dólares y 34.700 clientes activos. Del total de créditos otorgados el 97% se ubica en el área rural y solo el 3% en área urbana.

Otro actor es BANCAFÉ,⁹ el cual desde noviembre de 1999 ofrece el producto de "BANCAFÉ Comunitario" en el medio rural. Se ha convertido en el primer banco comercial privado de Guatemala, orientado a atender la micro y pequeña empresa. En el 2001, la institución hizo un replanteamiento estratégico, de donde surge un nuevo modelo de gestión y se crean tres unidades de negocios dentro de la cual se crea la Unidad de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para una atención más integral. En el proceso, BANCAFÉ ha contado con una asesoría y un apoyo financiero externos.

A diciembre del año 2002, BANCAFÉ contaba con una cartera para la MYPE de 7,1 millones de dólares, colocados entre diez mil clientes, del que se infiere un monto promedio de 700 dólares. La clientela es atendida a través de 54 agencias del banco (16 en el área metropolitana y 38 en el interior del país) del total de 95 agencias de negocios con que opera el banco. Además, cuenta con 42 asesores comerciales y 6 supervisores.

Cooperativas de ahorro y crédito. La mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran agrupadas a través de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC). Esta Federación, con 40 años de experiencia, está integrada por 25 cooperativas de ahorro y crédito y con 118 puntos de servicio a nivel nacional. A diciembre del año 2002, contaba con unos 350.000 asociados.

FENACOAC ha experimentado en los últimos diez años un crecimiento sostenido en términos de portafolio de ahorros, de activos totales y de clientes. Una de las fortalezas del sistema cooperativo ha sido la implementación de una estrategia de captación de ahorros en segmentos de mercado de nivel económico medio, población rural y sectores populares. Los depósitos de ahorro constituyen la principal fuente de financiamiento de los activos del sector cooperativo.

⁹ Bancafé, es un banco privado fundado en 1978 y uno de los bancos más grandes del sistema financiero nacional, cuenta con una red de 165 agencias a nivel nacional.

A diciembre de 2002, el total de activos del sistema FENACOAC ascendía a unos 249 millones de dólares, con un portafolio de 147 millones de dólares. Mientras tanto, el monto de las captaciones de ahorros es de 165 millones de dólares, o sea, 66% del activo. FENACOAC se orienta a mantener un exceso de los ahorros sobre los préstamos.

El crédito otorgado por FENACOAC se canaliza a satisfacer necesidades de vivienda, comercio, pequeña empresa, microempresa, agricultura y crédito de consumo. En el campo de las microfinanzas, la clientela se ubica en mercados rurales y en sectores medios y populares. Según sondeos realizados, el 30% de los créditos otorgados corresponde a montos menores de 322 dólares y el 90% de los créditos son menores a 2.615 dólares (FENACOAC, 2001). Las cooperativas afiliadas a FENACOAC se someten a un proceso de calificación de riesgo, encargado a una calificadora instalada en Guatemala por WOCCU.

Organizaciones no gubernamentales. Las 19 ONG más importantes en cuanto a tamaño y cobertura se han agrupado a través del gremio REDIMIF. Éstas cuentan con 130 agencias a nivel nacional, atienden en términos de créditos activos, a un total de 95.000 clientes y tienen una cartera de 38,5 millones de dólares. El 75% de la cartera se ubica en el área rural y el 51% está otorgada a mujeres. De las organizaciones asociadas a REDIMIF, Génesis Empresarial es la IMF más grande, con 35.500 clientes y una cartera a diciembre de 2002 de 17,5 millones de dólares, una red de 39 agencias y 135 asesores de crédito. En segundo lugar sigue ACT/FUNDEA, que a diciembre del 2002, contaba con 11.700 clientes activos y una cartera activa de 5,1 millones de dólares. FUNDEA tiene 17 oficinas a nivel nacional y 40 asesores de crédito. Sólo Génesis Empresarial y FUNDEA sobrepasan los 10,000 clientes. Tres socias de REDIMIF reúnen entre 5.000 y 10.000 clientes (CRS, CRY SOL y FAFIDESS).

El cuadro 5-1 muestra el nivel de profundidad según el crédito promedio de las cinco organizaciones más grandes asociadas a REDIMIF. Si se relaciona el monto promedio de crédito con el PIB per cápita para el 2002 (1.943 dólares) se observa que estas organizaciones trabajan con montos por el orden o inferior al 25% del PIB per cápita.

Cuadro 5-1
CRÉDITOS CARTERA ACTIVA, CRÉDITOS ACTIVOS Y PROMEDIO DE CRÉDITO
(Aquí hay varias unidades de medida, cada una en su columna)

Intermediaria	Cartera activa (dólares)	N° de préstamos	Monto promedio (dólares)
Génesis Empresarial	17 507 299	35 452	494
ACT/FUNDEA	5 070 930	11 679	434
CRS	1 076 387	7 155	150
FAFIDESS	2 329 952	5 919	394
Fundación CRY SOL	1 160 905	5 144	226
Total	27 145 473	65 349	415

Fuente: Construcción propia con base a datos de REDIMIF a diciembre del 2002

Intermediarias microfinancieras no asociadas a REDIMIF. Con relación a otras organizaciones de desarrollo existentes en el mercado que ofrecen servicios financieros, cabe hacer referencia a los otros actores que por sus características no están asociados a ninguna instancia y por lo tanto, no se cuantifica su participación en el mercado. Dentro de éstos, se destaca la participación de organizaciones internacionales tales como: Unión Europea, CARE, iniciativas promovidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, iniciativas apoyadas por US-AID, especialmente en las zonas del conflicto, iniciativas tendientes a apoyar repatriados y refugiados.

Un caso atípico en la no afiliación a REDIMIF, es el de FUNDAP, posicionada claramente en el mercado como la segunda institución más grande que ofrece servicios microfinancieros. Cuenta con 17.000 clientes con crédito y una cartera de 7 millones de dólares.

c) En resumen

El mercado de microfinanzas en Guatemala engloba una cartera total agregada y conocida por el orden de 240 millones de dólares, sin contar la cartera de numerosas entidades no afiliadas a REDIMIF. Con esta proporción, el país sigue globalmente el promedio latinoamericano, cercano a 25 dólares por habitante en cartera microcrediticia. Según un estudio comisionado por REDIMIF (Ringvald 2002), existen aproximadamente 100 instituciones proveedoras de servicios financieros al sector. Entre ellas, dos bancos, 26 cooperativas afiliadas a FENACOAC, 20 intermediarias afiliadas a REDIMIF y otras 50 entre otras cooperativas y organizaciones. Todas las organizaciones mencionadas cuentan con 645 agencias a nivel nacional y un total de 234.000 clientes activos.

El cuadro 5-2 muestra un resumen de los actores principales del sector microfinanciero. Según esta muestra hay un total de 235 millones de dólares invertidos en crédito en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde la mayor participación corresponde al sistema FENACOAC con un 62% del monto total. También sobresale la participación de BANRURAL (29%) y las intermediarias de REDIMIF (16%). Con respecto al nivel de profundidad, medida con relación al crédito promedio, sobresale la participación de REDIMIF, con el monto de crédito menor (438 dólares), lo cual evidencia que está llegando a los sectores más pobres de la población. Con relación a los costos de intermediación REDIMIF, muestra un promedio de un 33%, medido con relación a tamaño de cartera y en el caso de FENACOAC es menor a un 10%, en este caso medido con respecto al total de activos. Aunque los dos índices tienen parámetros de medición distintos, se nota que las socias de REDIMIF tienen un margen para mejorar su eficiencia. En relación al número de clientes con crédito, el conjunto de intermediarias está atendiendo a 204.000 clientes. Un mayor nivel de cobertura lo tiene REDIMIF con un 47% del total, seguido de FENACOAC con un 30% y BANRURAL con un 17%.

Cuadro 5-2

INSTITUCIONES FINANCIERAS SEGÚN GRUPOS AFINES Y VARIABLES RELEVANTES

(Datos correspondientes al año 2001 y 2002)

Institución financiera	Características relevantes	Nº de clientes activos	Cartera de crédito (millones de dólares)	Monto de crédito (promedio en dólares)	Costos de intermediación, como porcentaje del total de activos (en%).
FENACOAC	Integrado por 40 cooperativas de ahorro y crédito. Con más de 40 años de experiencia y 118 puntos de servicio	350 000 (membresía) 64 000 (clientes con crédito)	146,6	ND	Menor al 10%
REDIMIF	Agrupada 19 organizaciones de microfinanzas. Con 30 agencias a nivel nacional.	95 000 (clientes con crédito)	38,5	438	33% (medidos como porcentaje de la cartera)
BANRURAL	Banco de Desarrollo, con un departamento de microfinanzas	34 700 (clientes activos con crédito en micro, pequeña y mediana empresa)	43,0	1 000 (microempresas) 5,600 (pequeña empresa)	ND
BANCAFE	Banca privada. Con una unidad especializada en micro, pequeña y mediana empresa.	10 000	7,1	700	ND

Fuente: Construcción propia con base en investigación de campo y consultas bibliográfica.

Notas: ND: No disponible

La demanda global por los servicios microfinancieros se estima, en el nivel nacional, en aproximadamente un millón de personas. Por medio de la cobertura actual, se puede inferir que el nivel de penetración de mercado de las entidades microfinancieras en cuanto a número de personas es del 20% (204,000/1 millón). Este nivel de penetración se considera como relativamente bajo, pero un factor atenuante es que no incluye la clientela de algunos bancos comerciales con una amplia presencia en el país.

5.6 Potencial y limitaciones del sector microfinanciero

Al analizar el estado del sector de microfinanzas en Guatemala, resalta como uno de los grandes logros el enorme crecimiento en la cobertura de servicios. Ni en el medio urbano, ni mucho menos en los lugares más remotos del país se encontraban en los años ochenta las ventanillas para conseguir crédito pequeño y ágil como en la forma actual. La población productora de escasos recursos cuenta actualmente, no sólo con acceso a estas facilidades, sino que en muchos casos puede comparar la calidad y el precio de productos financieros ofrecidos por una gama de entidades no bancarias. Al mismo tiempo se observa la significativa reducción en los costos de transacción en los que incurren los clientes (rurales) para acceder a micro-préstamos.

Un segundo logro es la maduración y el profesionalismo de instituciones que ofrecen el servicio crediticio. Esto aplica en tres niveles: primero a las 25 cooperativas de ahorro y crédito, afiliadas a FENACOAC, que representan más de la mitad del volumen de operaciones en el sector. Sigue una media docena de instituciones microfinancieras no bancarias y no cooperativas que se han ido profesionalizando en el transcurso de la década de los noventa. No menos importante ha sido el avance en las capacidades de intermediación en el medio rural, al seno de numerosas organizaciones (de productores, municipios o departamentos), para administrar carteras de crédito con acierto y rigor).

Un tercer logro, más particular para el caso guatemalteco que en los demás países del Istmo, es la institucionalidad de las microfinanzas en las comunidades urbanas y rurales. Que se trate de bancos comunales, de asociaciones de desarrollo o de cooperativas, la amplia participación en las microfinanzas ha contraído un firme compromiso de los actores con la sostenibilidad de los mecanismos de intermediación. Guatemala es uno de los pocos países centroamericanos donde el concepto de grupos solidarios –o al menos la garantía moral de terceros– tiene vida y vigor en la práctica de la mayoría de las instituciones.

Un cuarto logro es que se ha mantenido una estructura nacional operativa, incursionada en microfinanzas desde varios ángulos. Por el lado estatal, durante el retiro de la banca estatal de fomento, se evitó dejar el vacío producido en muchos otros países, por ejemplo en Nicaragua. En cambio, la reestructuración de BANDESA y su transformación en BANRURAL garantizó la continuidad de los servicios en la casi totalidad del territorio nacional. Por el lado de la banca comercial destaca el caso de BANCAFÉ, en el que se fue creando una infraestructura y la capacidad para ofrecer un conjunto de servicios en forma viable y perenne. Ambos bancos buscan el acoplamiento de sus servicios con intermediarias no bancarias en forma mutuamente beneficiosa.

Muchas son las limitaciones en el otro lado de la medalla. El campo de las microfinanzas no es, como primer elemento, una cancha con reglas iguales para todos. Instituciones privadas con interés en ofertar servicios necesitan, en muchos casos, una relación de dependencia con una agencia cooperante para poder implementar un programa de microfinanzas y así compensar el costo de la inversión requerida. Son pocas las experiencias donde, aplicando las “reglas del mercado”, los inversionistas privados proceden a acciones para profundizar el mercado y lograr una mayor cobertura. A la vez se nota por parte de muchas agencias, en particular las multilaterales, una gran confianza en bancos comerciales, cuyas reglas del juego internas no siempre son las más apropiadas para mejorar las prácticas del sector.

En relación con lo anterior, se observan también tendencias de dependencia en el sentido opuesto. Muchas ONG guatemaltecas se han ido acostumbrando al apoyo recibido de organismos de cooperación, en distintas ocasiones en forma casi permanente e incondicionada. La evaluación de los servicios financieros, según parámetros comunes de viabilidad y conformidad al mercado financiero nacional, se ve a veces dificultada por la escasa disposición de las organizaciones para rendir cuentas a las entidades externas auspiciadoras. Esta característica tiende a verse con mayor claridad en el caso de ONG que operan líneas programáticas de distinta índole, contando con un apoyo a menudo bilateral. Al nutrirse la interdependencia entre ONG y agencias extranjeras, las microfinanzas encuentran problemas crecientes para insertarse en un mercado financiero competitivo.

Por lo general se nota la necesidad de una plataforma interinstitucional para la reflexión, la formulación de buenas prácticas y de políticas de ordenamiento del sector. Estándares de calidad se han ido uniformizando entre las intermediarias afiliadas a REDIMIF, pero su adopción entre las agencias cooperantes no ha sido uniforme. Ello se debe, entre otros, a la falta de una iniciativa conjunta, tomada por el Estado (VIMIPYME, CAN y/o la Superintendencia de Bancos), las agencias de cooperación (CCMF) y el sector (REDIMIF y FENACOAC) para constituir tal plataforma. En tal sentido, los ejemplos de Bolivia y de Uganda. En el caso guatemalteco no han tenido seguimiento hasta la fecha.

Por este mismo motivo sigue y seguirá presente un dilema importante en la reforma del marco legal para el sector. Por un lado se ve como cada vez más urgente la creación de un amparo legal a favor de las entidades microfinancieras que buscan tanto la profundidad como el profesionalismo de sus servicios financieros, más allá de la mera oferta de crédito. Por el otro lado se justifica la preocupación de que, de ampliarse el margen de maniobra para las microfinancieras, aumentarían los costos de supervisión, así como los riesgos para los usuarios finales quienes depositarían recursos propios y confianza en las mismas. Por el momento predomina la impresión de que el espacio legal para las instituciones no reguladas se encuentra bastante circunscrito.

La gran potencialidad del sector se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar existe un interés genuino del Estado para dar forma y sustancia a las políticas de promoción del sector micro-empresarial, también mediante medidas que promueven la calidad y representatividad del sector de microfinanzas. Los distintos programas del VIMIPYME reflejan un esfuerzo coordinado para crear un “entorno facilitador” al sector de la micro-empresa y el paquete de servicios financieros y los de desarrollo empresarial. En la coyuntura política del país, la presencia del Estado con un papel rector y orientador sigue teniendo una importancia no disminuida para que se desenvuelva un verdadero mercado de servicios. Ello implica la abstención del Estado como oferente activo de los mismos.

En segundo lugar, la organización espontánea de los actores institucionales del sector tendrá frutos palpables, siempre y cuando se busque la consolidación del sector a través de estándares comunes para medir el desempeño financiero e institucional de las intermediarias. Al respecto, llama la atención que las normas desarrolladas por CGAP parecen estar insuficientemente divulgadas en el sector, posiblemente también por una distancia relativa respecto a la normativa definida en cercanía del ámbito anglosajón.

El papel de la comunidad cooperante está claramente subestimado y subaprovechado. Cada vez menos los organismos de cooperación internacional están dispuestos a continuar dando donaciones para las instituciones financieras de desarrollo que no cumplan ciertos estándares de productividad, eficiencia y rentabilidad. Este es el aspecto alentador de sus actuales estrategias de intervención. Donde existe el margen para optimizar la orientación de las agencias, se observa en los siguientes elementos:

a) No asustarse y más bien reconocer plenamente el éxito de sus programas de cooperación, en cuanto al desarrollo de capacidades organizativas, gerenciales e institucionales en el manejo de

servicios financieros. Un ejemplo del éxito insuficientemente reconocido, se distingue en el enfoque de la Unión Europea, que luego de una serie de programas de desarrollo rural integral que propiciaron exitosamente una media docena de asociaciones rurales intermediarias, ahora parece observar una relativa distancia respecto a la promoción de microfinanzas en el país.

b) Mantener una distancia crítica respecto a las organizaciones apoyadas que ofrecen una gama de servicios, en donde la oferta de crédito se encuentra como uno entre otros de carácter no financiero. Siempre se justifica el elemento de apoyo no reembolsable para el desarrollo de capacidades intermediarias, pero éste debería de ser cuantificado y analizado oportunamente en el desarrollo institucional de la organización beneficiada. Agencias cooperantes, sobre todo en el ámbito bilateral, merecen una evaluación objetiva e imparcial de los resultados de su apoyo. Al respecto cabe destacar la importancia de estudios de impacto como parte de la misma.

c) La coordinación entre donantes es un esfuerzo adicional que ha recibido mucha atención en los últimos años. Sin embargo, el intercambio de experiencias y los intentos de evitar traslapes de programas por sí solos son insuficientes. Más relevante y más difícil, es el debate sobre cómo estandarizar normas de apoyo (no) reembolsable, promover las buenas prácticas y comúnmente analizar las malas, sus causas y tirar las lecciones para el futuro.

El peso para hacer progresar las microfinanzas en el país, descansa mayormente en los actores individuales e institucionales. Iniciativas excelentes han sido tomadas mediante la constitución de REDIMIF, su participación y la de sus socias en los espacios supranacionales de REDCAMIF y FORO-LAC-CR. En el nivel nacional destaca la creación de la Central de Riesgos (CREDIREF S.A.), que se vislumbra, pese a su afiliación de socios incompleta, como prometedora para entrelazar los sistemas de información en el combate de la mala paga.

No obstante el avance de los servicios de las ONG, el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito aglutinado por FENACOAC, sigue representando la mayor parte del sector de microfinanzas. No es de olvidar que tanto en la membresía en el primer piso como en la composición de la cartera de créditos agregada, el segmento cooperativo engloba cerca al 60% del total de usuarios y de recursos, respectivamente. La formulación de políticas rectoras, regulatorias y orientadoras no pueden sino partir de la posición prevaleciente del cooperativismo en el paisaje microfinanciero.

El reto principal de los actores en la década actual –y una sociedad civil poco segura– es cómo posicionarse colectivamente frente a la paulatina reducción de apoyo no reembolsable externo, en conjunto con un régimen más estricto en la regulación nacional. La necesidad de implementar una disciplina financiera y una normativa prudencial para garantizar la consolidación de las intermediarias financieras, es una lección que no debe dejarse pasar de lado. Ello implica un debate franco y abierto sobre cómo ampliar la frontera de las microfinanzas, rumbo a la atención de la mayoría de la población de escasos recursos, con intermediarias financieramente capitalizadas, técnicamente preparadas y operativamente eficientes. El beneficiario de este debate serán el propio sector, sus partícipes y, sobre todo, sus usuarios finales.

VI. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones

a) El contexto

Es importante entender que para el desarrollo económico de un país, es vital contar con un mercado financiero eficiente. El bajo desempeño económico de los países centroamericanos, en la última década, puede tener su base en la ausencia de un sistema financiero adecuado, que permita el uso eficiente de los recursos en actividades prioritarias.

En términos generales, el dinero para el desarrollo de iniciativas privadas es cada vez más caro y escaso, producto del alto índice del crédito interno hacia el sector público y la presencia de mercados financieros poco profundos.

El modesto desempeño financiero registrado en los países centroamericanos se debe a factores tales como: a) Captación moderada de ahorros; b) Crecimiento constante de los créditos dirigidos al consumo; y c) Alto déficit fiscal. Pocos países tienen una regulación y/o supervisión de las instituciones financieras suficientemente desarrollada; evidencia de ello es la gran cantidad de bancos que se han declarado en quiebra en la última década. Las instituciones creadas no han sido capaces de dirigir recursos hacia sectores prioritarios. Las ineficiencias del sector bancario, en la mayoría de los países, han resultado en tasas de interés superiores

al promedio en América Latina, con la excepción de El Salvador cuyas tasas se han mantenido en niveles aceptables.

El desarrollo de un sector financiero está directamente relacionado con los avances del sector productivo. Un sector financiero puede responder a las oportunidades creadas a través de un crecimiento económico, pero no puede acelerar este crecimiento en un ambiente económicamente desfavorable. Los préstamos pueden facilitar las transacciones y la introducción de nuevas tecnologías, sin embargo, no pueden compensar los costos relacionados a la ineficiencia en los sistemas de producción, los bajos precios ofrecidos en el mercado o las condiciones indigentes de la infraestructura. Son justamente estas condiciones externas las que limitan el impacto de los servicios crediticios al nivel de las empresas u hogares.

Durante la última década, la función del Estado en el mercado financiero centroamericano ha sido limitado, mientras que los años sesenta y setenta se caracterizaron por el otorgamiento de créditos dirigidos, con condiciones blandas y colocados por entidades estatales; en la década de los años noventa se observó una retención general del Estado como actor directo en el mercado financiero. Esta retención estimuló el desarrollo de iniciativas privadas que permitieran la cobertura de la brecha financiera dejada por el Estado. Este proceso trajo consigo la creación de centenares de IMF las cuales se establecieron a través del apoyo de la cooperación internacional.

b) Situación de las microfinanzas en Centroamérica

El análisis presentado en los estudios de tres países diferentes, revela la siguiente conclusión: el desarrollo del sector de las microfinanzas en Centroamérica es desigual e incipiente. Se observa un cambio importante en cuanto al enfoque hacia el instrumento de las microfinanzas en comparación con los años ochenta.

En todos los países hay un enfoque donde la sostenibilidad financiera y la cobertura del mercado es un elemento clave para el desarrollo del sector. Sin embargo, en términos generales, la cobertura sigue siendo limitada y la sostenibilidad aun es un reto para muchas organizaciones. Gran parte de la población aun no tiene acceso a los servicios financieros, no obstante al aumento de la oferta crediticia.

En los países centroamericanos, se observa una tendencia hacia la comercialización de los servicios microfinancieros. Es decir, están dadas las bases para la expansión de los servicios, pero la ampliación de la cobertura sigue siendo un reto. Esta comercialización trae como ventajas la profesionalización de los servicios ofrecidos y por ende, la obtención de instituciones financieramente sostenibles. Si bien esta madurez genera instituciones fortalecidas, existe el riesgo de que dicha comercialización afecte la profundidad de las carteras crediticias manejadas por éstas. Estudios realizados sobre el tema señalan que las IMF en su proceso de regulación, suelen perder su enfoque original y en consecuencia, minimizan la atención de los estratos más pobres. Según los resultados del presente estudio el mayor nivel de profundidad del mercado lo logran las organizaciones no gubernamentales (monto promedio de crédito menor).

Por otra parte la labor de las entidades reguladas es cada vez más sustancial en el ámbito de los servicios microfinancieros. Ejemplo de ello son Financiera Calpiá y Banco Salvadoreño en El Salvador, BANRURAL y BANCAFÉ en Guatemala. También el reto que enfrenta Génesis Empresarial en Guatemala.

Se ha observado, que las iniciativas de regulación provienen de instancias creadas por grupos de IMF cuyos modelos se basan en las particularidades de cada país. Mientras que en Costa Rica se busca la regulación a través de la graduación de las IMF hacia entidades financieras y la autorregulación a través de una red de IMF, en El Salvador se ha establecido una ley que busca propiciar la graduación paulatina de IMF en entidades formales. En Guatemala por su parte, las

iniciativas de regulación aun se encuentran en una fase de valoración y cuestionamiento por parte de algunos sectores.

c) Limitaciones para el desarrollo del sector microfinanciero

El desarrollo del sector microfinanciero se ve limitado tanto por factores externos como de las IMF mismas. A continuación se presentan de forma resumida los factores más importantes:

Situación legal. Al nivel de la estructura legal, se observan problemas en el registro de los bienes, lo que dificulta la adecuada aplicación de las garantías. En la mayoría de los países centroamericanos, los sistemas de registro de la propiedad tienen alcances limitados e incompletos y, por lo general, sólo registran bienes inmuebles (tierra, casas, edificios) y vehículos. Esto hace que las garantías hipotecarias sean las más seguras para las instituciones financieras, aun cuando los costos legales del lado del cliente son elevados, sobre todo si se toma en cuenta que los mismos son para la obtención de un microcrédito que generalmente está por debajo del valor del bien. Un punto adicional es la ejecución de las garantías debido a que los costos y los trámites necesarios para efectuar un cobro judicial muchas veces son mayores que el monto a recuperar.

Diversificación de los servicios. Hasta el momento, la mayoría de las IMF se han visto circunscritas en sus estrategias de expansión de servicios, con la excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, los servicios se han limitado a la colocación de préstamos. Debido a la falta de una regulación adecuada en todos los países centroamericanos, las IMF no pueden captar fondos del público, lo que restringe sus posibilidades de expansión.

Cobertura limitada. Uno de los factores de éxito en las instituciones de microfinanzas es precisamente la expansión de los servicios para lograr economías de escala que le permitan reducir sus costos; en este sentido son pocas las organizaciones que logran obtener un nivel de expansión en donde se beneficien de las economías de escala. Del total de organizaciones contempladas en el estudio sólo Génesis empresarial, Banrural y Calpiá llegan a alcanzar coberturas de más de 25.000 clientes y la mayoría se ubican en rangos menores a los 5.000.

Sesgo urbano. Los servicios microfinancieros se concentran en los cascos urbanos. Aparentemente los costos y riesgos relacionados al sector rural son altos. Las experiencias exitosas son principalmente de IMF que trabajan con sectores, donde el dinero tiene una circulación rápida (comercio y servicios), permitiendo la colocación de préstamos a corto plazo, en muchos casos menor de tres meses y a grupos de clientes concentrados en una misma área geográfica. Estas condiciones son opuestas a las del sector rural debido a que el mismo suele exigir plazos mayores y existe una importante dispersión geográfica.

Regulación y supervisión. El problema más estructural del sector microfinanciero es la falta de regulación y supervisión. Las IMF no reguladas no cuentan con una instancia que supervise sus actividades. La falta de una estructura legal para realizar actividades de intermediación financiera afecta su funcionamiento y sostenibilidad a largo plazo. Las IMF no pueden ofrecer el servicio de ahorro y dependen de fondos comerciales y/o de la cooperación internacional. Además, la regulación puede incitar a la competitividad del sector financiero, debido a que se hace necesaria la participación de un número suficiente de intermediarios para asegurar la adjudicación de capital, los servicios de pago al sector real de la economía, así como la libre competencia en el reclutamiento de clientes.

Capacidad institucional. La mayoría de las IMF se encuentran en una situación débil en cuanto a acceso a tecnologías microfinancieras y a personal altamente capacitado, especialmente en el caso de ONG, las cooperativas de ahorro y crédito en las áreas rurales, sobre todo las no agremiadas y las IMF que manejan carteras crediticias pequeñas.

d) Los elementos de éxito del sector microfinanciero

En la región existen varios ejemplos de IMF exitosas. Algunos de los aspectos que tienen en común y que marcan su éxito se pueden resumir en los siguientes puntos:

Búsqueda de la sostenibilidad. Las instituciones microfinancieras exitosas, tienen en común que su enfoque ha estado dirigido hacia la sostenibilidad de sus operaciones. Desde sus comienzos las organizaciones han tenido una visión de largo plazo, es decir, han puesto especial atención a cubrir con la tasa de interés la estructura de costos, generando excedentes para apalancar su crecimiento. Por otra parte han prestado especial atención a la recuperación de sus carteras de crédito.

Desarrollo de tecnologías crediticias. Por otra parte han desarrollado tecnologías micro financieras que les permiten amplia cobertura, incluyendo en sus carteras una cantidad importante de hogares de bajos recursos. El desarrollo de la tecnología, por lo general, se basa en un dominio de los principios y enfoques de las metodologías tradicionales de microfinanzas, como son el Banco Comunal y los grupos solidarios y una adaptación de esas metodologías a las características y condiciones del entorno. En ese proceso el ajuste permanente de las metodologías y el monitoreo de los resultados alcanzados, se visualiza como la clave del éxito. Por otra parte hay organizaciones como Calpiá que se han especializado en la metodología de crédito individual, en donde la clave del éxito ha sido el conocimiento del cliente y la medición de su capacidad de pago, así como el análisis integral empresa-familia. Por lo general la capacidad de pago se mide como un porcentaje del excedente neto de la empresa (50%).

Cobertura. Otra de las características de las organizaciones exitosas es la cobertura de los servicios, lo que les permite lograr economías de escala. A través de los subsidios obtenidos, las IMF han logrado fortalecer su estructura organizacional y expandir sus operaciones. Un elemento clave ha sido la creación de una relación de larga duración con los clientes, con la finalidad de crear un historial crediticio que estimule el cumplimiento de los compromisos adquiridos y en retribución, les asegure su acceso a este servicio en el futuro. Por lo general las organizaciones exitosas tienen una amplia gama de servicios y cobertura a nivel nacional. El BANRURAL en Guatemala, es uno de los pocos actores cuya cartera se compone principalmente de clientes rurales. Su cobertura es nacional y cuenta con más de 34 mil clientes. Pasó de ser una entidad financiera ineficiente con grandes pérdidas financieras y una cobertura limitada, a una de las IMF con una importante participación en el mercado. La Financiera Calpiá en El Salvador, logró convertirse de una ONG a una financiera regulada, con más de 44 mil créditos vigentes, que está en proceso de convertirse en banco y proyecta expandir sus operaciones a otros países de Centroamérica. Otro ejemplo de éxito lo constituye Génesis empresarial que está en proceso de negociar una alianza estratégica con una institución financiera formal.

Disminución de los costos de transacción. Algunos factores que han contribuido con el éxito, tienen relación con la disminución de los costos de transacción relacionados a la colocación de los préstamos. Dentro de los aspectos que influyen en la disminución de los costos se pueden señalar: economías de escala, control de indicadores del desempeño, búsqueda de la eficiencia, énfasis en la recuperación.

Diversificación de los productos. La diversificación de los productos y el ajuste de sus productos financieros a la demanda son factores presentes en las organizaciones exitosas. Algunos ejemplos de esto son: el financiamiento de infraestructura en zonas en donde se considera prioritario, el financiamiento de vivienda con metodologías propias de microcrédito, como es el caso de un plan de reparación para la vivienda que involucra una serie de microcréditos de corto plazo.

Sistemas de incentivos. La aplicación de estos sistemas para la motivación de su personal, es un factor presente en las organizaciones exitosas. Por lo general los planes de incentivos van ligados a la colocación y a la recuperación. La estructura salarial tiene una base fija y una variable ligada al desempeño de los funcionarios, especialmente de los responsables de cartera.

Asesoría especializada. Se observa un proceso de diferenciación en cuanto a la capacidad institucional de las IMF que han contado con asesoría especializada por varios años y las que no han tenido

ese recurso. Las IMF que han optado por un camino de especialización y expansión, generalmente han contado con el apoyo de agencias de la cooperación internacional, tales como: Acción Internacional de EEUU e IPC de Alemania. Este acompañamiento directo hace que estas IMF desarrollen una capacidad institucional parecida a la del sector bancario.

Los ejemplos mencionados en este contexto señalan varias lecciones. No es sencillo crear una institución exitosa en un corto período. Las instituciones suelen pasar por diferentes fases de desarrollo lo cual les permite alcanzar cierto nivel de maduración. Este proceso podría verse afectado cuando el contexto en que trabaja la IMF no es favorable o, por lo contrario, no cuenta con la tecnología apropiada para favorecer su desarrollo. Las microfinanzas pueden llegar a los estratos de bajos recursos, siempre y cuando las tecnologías aplicadas se ajusten a las características de la clientela. Este ha sido uno de los puntos más delicados a tratar por parte de las IMF, sobre todo, cuando se trata de grupos pobres ubicados en las zonas rurales. Existe la necesidad de ampliar la frontera microfinanciera hacia el sector rural donde la cobertura ha sido limitada. En tal sentido, es importante apoyar iniciativas que permitan el desarrollo de productos tendientes a mejorar la eficiencia y el alcance de una mayor profundidad.

6.2 Recomendaciones

a) Crear el ambiente político favorable

Las reformas financieras durante los años noventa han contribuido a un mejoramiento general del ambiente financiero en la región centroamericana. Sin embargo, aun no existe una política favorable en todos los países para el desarrollo de las microfinanzas, ejemplo de ello, son las restricciones en la captación de ahorros al público y las limitaciones legales en cuanto a las garantías.

A corto plazo, es necesario que los gobiernos definan una política adecuada hacia las microfinanzas, en estrecha relación con los diferentes actores involucrados.

En el caso de El Salvador, las iniciativas de coordinación y la definición de una política de apoyo al sector comienzan a dar los primeros resultados en términos de fortalecer el acceso a los servicios financieros, creando las condiciones para la expansión y comercialización de los servicios microfinancieros.

b) Coordinar las iniciativas de la cooperación internacional

Es crucial reconocer que las actividades e iniciativas de la cooperación internacional hasta hace muy poco han sido aisladas. En este sentido, es prioritario continuar y fortalecer los espacios de coordinación que se han comenzado a desarrollar entre los diferentes actores, definiendo un enfoque más integrado para el desarrollo del sector. El enfoque actual de la cooperación internacional ha resultado en iniciativas aisladas y en el otorgamiento de subsidios para operaciones no sostenibles. El enfoque propuesto por algunas agencias de cooperación en cuanto a la población meta a atender ha resultado en una cobertura limitada, en un servicio no sostenible y en un bajo impacto de las intervenciones.

c) Maduración de la oferta de entidades microfinancieras

El desarrollo de una gran cantidad de IMF independientes afecta su viabilidad financiera, debido a que no se pueden aprovechar las economías de escala. Por lo tanto, es importante que se abra una discusión sobre el futuro del sector y el papel de las IMF, tomando en cuenta los costos que implica el mantener una oferta tan amplia.

d) Reforzar la infraestructura financiera

La tendencia en la región centroamericana ha estado enfocada en la creación de IMF y programas financieros dejando a un lado el establecimiento de una infraestructura que apoye, fortalezca y asegure la sostenibilidad de las IMF y los programas microfinancieros.

El desafío más importante para el sector, es la creación de un marco de regulación y supervisión adecuado que no afecte las metodologías innovadoras aplicadas por las IMF para entregar servicios financieros ajustados a la población de bajos recursos.

Otro tema importante, es el desarrollo de los sistemas de recolección y divulgación de información de los prestatarios. El intercambio de información entre las IMF es limitado para realizar una evaluación completa de sus clientes prestatarios. La cooperación podría desempeñar un papel importante en este tema. Para ello sería necesario un análisis sobre las posibilidades y limitaciones para el funcionamiento de un centro de riesgo independiente. Adicionalmente se debería fomentar una cultura para compartir la información entre las IMF.

e) Marco regulatorio apropiado y supervisión

En un entorno como el encontrado en Centroamérica en donde existe un número importante de IMF, la creación de un marco regulatorio contribuiría al desarrollo del sector y propiciaría un crecimiento ordenado. Por su parte, la supervisión podría tornarse en una tarea compleja y de difícil ejecución, en tal sentido, las medidas a tomar sobre el tema deberían impulsar alianzas estratégicas entre las IMF con la finalidad de lograr una mayor integración y su fortalecimiento. En países donde se ha introducido un marco regulatorio para las IMF, como en el caso de Bolivia, la tendencia ha sido la fusión de entidades homólogas.

f) Desarrollo institucional y profesionalización

Las microfinanzas son complejas y requieren de profesionales altamente capacitados. Por otra parte no existen instituciones académicas que se especialicen en la formación de los diferentes técnicos y profesionales que requiere el sector microfinanciero. La experiencia indica que las instituciones fuertes son manejadas por personas capacitadas. A través de una evaluación de la capacidad instalada al nivel de las IMF, se deberían ofrecer programas de capacitación altamente especializados como parte del desarrollo institucional. La tendencia a la fecha ha sido la inversión en capital de trabajo (fondos para crédito) y una reducida inversión en el desarrollo institucional. Por otra parte, las alternativas de desarrollo del recurso humano son reducidas y no necesariamente responden a los requerimientos que enfrentan las instituciones microfinancieras. La inversión en el desarrollo del recurso humano es una prioridad.

g) El microcrédito como herramienta de combate a la pobreza

La inversión hecha por gobiernos y organismos de cooperación internacional en la última década en programas de microcrédito se debe, como se señaló al principio de este documento, a que él mismo representa una estrategia de combate a la pobreza. Sin embargo, un dato que llama a la reflexión es que estudios hechos en Costa Rica y Panamá, sobre el aporte del sector informal al PIB muestran que es alrededor del 10%, siendo inferior a lo que se esperaba (Castiglia, Martínez y Mezzera 1995). Por otra parte estudios recientes realizados en Centroamérica (Arroyo y Nebelung 2002) evidencian que la MYPE genera el empleo de la peor calidad, precario y caracterizado por la desprotección social, baja productividad y por bajos ingresos. A su vez, el empleo no puede ser considerado deseable desde el punto de vista de desarrollo económico y social.

Bibliografía

- Acorde (2002), “Asociación Costarricense de Organizaciones de Desarrollo, Memoria de Labores 2001, San José, Costa Rica”.
- Anteproyecto (2003), “Ley de Intermediarios Financieros No Bancarios”, Guatemala.
- Arroyo, J. (2001), “El mercado de los servicios de desarrollo empresarial para la micro y pequeña empresa en América Central”, San José, Costa Rica, PROMOCRO – OIT.
- Arroyo, J. y M. Nebelung (2002), “La Micro y Pequeña empresa en América Central: Realidad, Mitos y Retos”, San José y Guatemala, GTZ/PROMOCAP – PROMICRO/OIT.
- Banco Central de Costa Rica (BCCR) (2000), “Organización y Comportamiento Estratégico en la Industria Bancaria Costarricense”, documento de trabajo. Departamento de Investigaciones Económicas. Banco Central de Costa Rica, San José.”
- Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) (2001), “Memoria de Labores Annual Report”, El Salvador.
- Briceño, A. (2003), “Las microempresas en Costa Rica” (borrador). San José, Costa Rica.
- Calpia (2002), “Memoria de Labores”, San Salvador, El Salvador.
- Camacho, A. R. (1999), “Centroamérica: Balance Macroeconómico y Estado Actual de los Sistemas Financieros_ Alajuela, Costa Rica”
- ___ (1999), “Sobre la eficiencia y competitividad de los sistemas financieros en Centro América”. Informe preliminar.
- Campion y White (1999), “Institutional Metamorphosis: Transformation of Microfinance NGOs into Regulated Financial Institutions”. Occasional Paper N° 4, *Microfinancer Network*. Washington D.C.”
- Castiglia, Martínez y Mezzera (1995), “Sector Informal Urbano: Una Aproximación a su Aporte al Producto”, OIT, Santiago de Chile.
- CEPAL (2003), “Situación y Perspectivas 2003. Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2002-2003”. División de Desarrollo Económico CEPAL, Santiago de Chile.

- ___ (2002), “Proyecciones Latinoamericanas 2001-2002”. División de Desarrollo Económico CEPAL, Santiago de Chile.
- Céspedes, W. (2003), “Economía deprimida pero crédito pujante”, *El Financiero* N° 397, 3-9 de febrero de 2003, p. 23.
- Clemens, H. (1997), “Estudios de la oferta y la demanda de crédito rural en Costa Rica: Estudios de Casos en Tres Regiones”, documento de trabajo CDR-9703, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural-Universidad Libre de Ámsterdam, San José, Costa Rica.
- Clemens y Wattel (1998), “¿Otro ciclo de interenciones no sostenible en los mercados de crédito? Un análisis de casos no sostenibles en Centroamérica”. CDR/ULA. San José, Costa Rica.
- CMCA (2002), “Informe Económico Regional 2002”, Consejo Monetario Centroamericano, San José, Costa Rica.
- Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (2001), “Estudio de oferta y demanda de créditos en el sector microempresarial”, San Salvador, junio.
- Christen R. (2001), “Comercialización y desvío de la misión: La transformación de las microfinanzas en América Latina”, CGAP, Washington, DC.
- ___ (2000), “Política nacional para la micro y pequeña empresa”, San Salvador.
- Daniels L. (1999), “The role of small enterprises in the household and national economy in Kenya: A significant contribution or last resort.” En: *World Development* Vol 27(1).
- Eco (2001), www.eco.microempresa.org, Diciembre.
- Economic Intelligent Unit (2002), “Country Profile 2001: Costa Rica”, Londres, Reino Unido.
- El Financiero (2003), “Indicadores Económicos”, *Suplemento Especial de El Financiero*, 24 de febrero 2003.
- Estado de la Nación (2001), “Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible”, *Séptimo informe*, San José, Costa Rica.
- FEDECREDITO (2002), “Memoria de labores Federación de Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores”, San Salvador.
- FENACOAC (2001), “Conozca el sistema de cooperativas de ahorro y crédito de Guatemala”, *Millenium*, Guatemala.
- Génesis Empresarial (2001), Memoria de Labores, *Annual Report*.
- Gómez de Miguel, A. I. (2001), “Catálogo de fuentes de financiamiento para el sector agropecuario costarricense”, SEPSA y CNP, San José, Costa Rica.
- González, Carlos (1998), “El entorno financiero de la microempresa en Guatemala”, *Una aproximación al entorno financiero de la microempresa en Guatemala*, N° 60, Guatemala.
- González-Vega, C. (1995a), “Los programas de asistencia a la microempresa: viabilidad e integración a los mercados financieros”, en Vega y Sanabria (eds.) (1995), *Financiamiento y apoyo a la microempresa*. Académica de Centroamérica, San José, Costa Rica, pp. 95-100.
- ___ (1995b), “Viabilidad institucional: condición de éxito de los programas de microempresas”, en Gonzalez-Vega y Sanabria (eds.) (1995), *Financiamiento y apoyo a la microempresa*. Académica de Centroamérica, San José, Costa Rica, pp. 117-136.
- Grupo ACT (2002), “Apoyando el autodesarrollo de los pequeños agricultores y empresarios de la micro y pequeña empresa con créditos - capacitación - comercialización”, *Memoria de labores 2002*, Guatemala.
- GTZ (2001), “Mercado de los servicios de desarrollo empresarial para la pequeña empresa: ¿subsidio o rentabilidad?”, IV Encuentro Latinoamericano, Programa (Ponencias: véase www.sdemicroempresa.org), Guatemala.
- Held, Günther (1999), “Políticas de crédito para empresas de menor tamaño con bancos de segundo piso: experiencias recientes en Chile, Colombia y Costa Rica”, Santiago, Chile CEPAL.
- Helms (2002), “*Microfinance in Central America and Mexico: Profile and Challenges*”, CGAP, Washington DC.
- ILO (2001), “Informe de las Actividades CINTERFORD/ILO”.
- La Hora (2003) “<http://www.lahora.comgt/03/02/14/paginas/economico2.htm>” Guatemala de la Asunción, 13 al 20 de febrero.
- Leitón P. (2003), “Ticos piden más para el consumo”, *La Nación* 19 de febrero, 2003, San José, Costa Rica pp. 22.
- Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios (2001), Decreto N° 849, en enero de 2001.
- Loría, M. (2001), “Importancia e incidencia del entorno en los mercados financieros rurales: El caso de Costa Rica”, Ponencia para comentarios.
- Machacuay, Samuel (2001), “Propuesta de plan de acción para el impulso de los servicios de desarrollo empresarial (SDE)”, Proyecto ordenamiento del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas en el

- área de servicios de desarrollo empresarial, Convenio ATN/MT-6500-GU MINECO/BID Guatemala. VIMIPYME.
- Mideplan (2002), “Plan nacional de desarrollo 2002-2006” Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica. <http://www.mideplan.go.cr/PND-2002-2006/est-crec-gen-emp/Financiera/Diagnostico-financiera.ht00m>.
- Miller, T (1995), “Análisis de viabilidad financiera para organizaciones privadas de desarrollo”, en Vega, G. C. y T. M. Sanabria (ed.) (1995) *Financiamiento y apoyo a la microempresa*. Académica de Centroamérica, San José, Costa Rica, pp. 137-155.
- MINECO/BID (2001), “Programa de desarrollo institucional y de políticas de apoyo de la micro, pequeña y mediana empresa en Guatemala (MINECO-BID)”, *Resumen Ejecutivo*, Guatemala.
- ____ (2002), “Matriz de plan operativo servicios de desarrollo empresarial”, abril 2002 - marzo 2003. Guatemala.
- ____ (2002), “Funciones del CAN y sus representantes”, Guatemala.
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2002), “Plan nacional de desarrollo 2002-2006” Costa Rica, MIDEPLAN. <http://www.mideplan.go.cr/PND-2002-2006/est-crec-gen-emp/Financiera/Diagnostico-financiera.ht00m>
- Nusselder y Sanders (2002), “La maduración de las microfinanzas en Nicaragua: Desafíos y oportunidades.” CDR-ULA,, COSUDE, Managua.
- Olivares, M. (1995), “El financiamiento a las microempresas: algunas lecciones”, en González Vega y Sanabria (eds.) (1995) *Financiamiento y apoyo a la microempresa*. Académica de Centroamérica, San José, Costa Rica. pp. 101-117.
- Organización Internacional de Trabajo (OIT) (2001), “El sector informal de la economía: características de la micro y pequeña empresa en Costa Rica”, Costa Rica, PROMICRO/OIT.
- PROMICRO (2000), “La microempresa en Guatemala en la década de 1990”, Cuaderno de Trabajo N° 6. San José, Costa Rica. Viceministerio de la Microempresa.
- PROMICRO/OIT (1999), “La microempresa en América Central”, San José, Costa Rica. PROMICRO/OIT.
- PROSIGUA/IDIES (1999), “Una aproximación al entorno financiero de la microempresa”, Guatemala.
- Ringvald, M. (2002), “Planificación Estratégica y Operativa”, Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala, REDIMIF. Guatemala.
- Sequeira (2000), “En otras manos - El negocio fiduciario en Costa Rica, sus límites, perspectivas y distintas modalidades”, en *Banca y Finanzas*, San José, Costa Rica. pp 32-34.
- Soto (1998), “*Componentes de crédito e proyectos de desarrollo rural*, Ruta, San José, Costa Rica”.
- Superintendencia del Sistema Financiero SSF. (2003) “Memoria de Labores” El Salvador.
- Trejos Solórzano, J.D. (2000), “La microempresa en Guatemala en la década de 1990”, *Cuadernos de Trabajo* N°6. San José, Costa Rica. PROMICRO– OIT.
- Universidad de Costa Rica (2001), “Caracterización de la empresa exportadora y no exportadora costarricense: Encuesta”, Instituto de Investigación de Ciencias Económicas y Banco Nacional de Costa Rica. San José, Costa Rica.
- Valenzuela, María, e Irene Solares (1998), “Los sistemas financieros de la microempresa: una alternativa para su análisis”, Guatemala, Universidad Rafael Landívar.
- Vega y Sanabria (1995), “Bancosol. El reto del crecimiento en organizaciones de microfinanzas”
- Villalobos Barahona, I. y L. Clercx (2001), “Mercado de servicios financieros y no financieros en Guatemala”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Universidad Libre de Amsterdam. Novib, Holanda.
- Wattel, C.J. y A. Sanders (2001), “La experiencia del microcrédito en Centroamérica: una interpretación selectiva de las prácticas y lecciones aprendidas”, en Clemens y Ruben (eds.), pp. 179-208, Nueva Ruralidad y Política Agraria: una alternativa neoinstitucional para Centroamérica. Nueva Sociedad, Venezuela.
- Westley y Branch (2000), “Dinero seguro: Desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito eficaces en América Latina”. IADB, Washington D.C.
- World Bank Group (2001), “*Business Development Services for Small Enterprises: Guiding Principles for Donor Intervention*”, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Edición 2001, Washington. (www.sip.org) febrero 2001.



NACIONES UNIDAS

Serie**CEPAL****financiamiento del desarrollo****Números publicados:**

1. Regulación y supervisión de la banca en la experiencia de liberalización financiera en Chile (1974-1988), Günther Held y Raquel Szalachman (LC/L.522), 1989.
2. Ahorro e inversión bajo restricción externa y focal. El caso de Chile 1982-1987, Nicolás Eyzaguirre (LC/L.526), 1989.
3. Los determinantes del ahorro en México, Ariel Buira (LC/L.549), 1990.
4. Ahorro y sistemas financieros: experiencia de América Latina. Resumen y conclusiones, Seminario (LC/L.553), 1990.
5. La cooperación regional en los campos financiero y monetario, L. Felipe Jiménez (LC/L.603), 1990.
6. Regulación del sistema financiero y reforma del sistema de pensiones: experiencias de América Latina, Seminario (LC/L.609), 1991.
7. El Leasing como instrumento para facilitar el financiamiento de la inversión en la pequeña y mediana empresa de América Latina, José Antonio Rojas (LC/L.652), 1991.
8. Regulación y supervisión de la banca e instituciones financieras, Seminario (LC/L.655), 1991.
9. Sistemas de pensiones de América Latina. Diagnóstico y alternativas de reforma, Seminario (LC/L.656), 1991.
10. ¿Existe aún una crisis de deuda Latinoamericana?, Stephany Griffith-Jones (LC/L.664), 1991.
11. La influencia de las variables financieras sobre las exportaciones bajo un régimen de racionamiento de crédito: una aproximación teórica y su aplicación al caso chileno, Solange Bernstein y Jaime Campos (LC/L.721), 1992.
12. Las monedas comunes y la creación de liquidez regional, L. Felipe Jiménez y Raquel Szalachman (LC/L.724), 1992.
13. Análisis estadístico de los determinantes del ahorro en países de América Latina. Recomendaciones de política, Andras Uthoff (LC/L.755), 1993.
14. Regulación, supervisión y desarrollo del mercado de valores, Hugo Lavados y María Victoria Castillo (LC/L.768), 1993.
15. Empresas de menor tamaño relativo: algunas características del caso brasileño, César Manoel de Medeiros (LC/L.833), 1994.
16. El acceso de las pequeñas y medianas empresas al financiamiento y el programa nacional de apoyo a la PYME del Gobierno chileno: balance preliminar de una experiencia, Enrique Román González y José Antonio Rojas Bustos (LC/L.834), 1994.
17. La experiencia en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa en Costa Rica, A.R. Camacho (LC/L.835), 1994.
18. Acceso a los mercados internacionales de capital y desarrollo de instrumentos financieros: el caso de México, Efraín Caro Razú (LC/L.843), 1994.
19. Fondos de pensiones y desarrollo del mercado de capitales en Chile: 1980-1993, Patricio Arrau Pons (LC/L.839), 1994.
20. Situación y perspectivas de desarrollo del mercado de valores del Ecuador, Edison Ortíz-Durán (LC/L.830), 1994.
21. Integración de las Bolsas de valores en Centroamérica, Edgar Balsells (LC/L.856), 1994.
22. La reanudación de las corrientes privadas de capital hacia América Latina: el papel de los inversionistas norteamericanos, Roy Culpeper (LC/L.853), 1994.
23. Movimientos de capitales, estrategia exportadora y estabilidad macroeconómica en Chile, Manuel Agosin y Ricardo French-Davis (LC/L.854), 1994.
24. Corrientes de fondos privados europeos hacia América Latina: hechos y planteamientos, Stephany Griffith-Jones (LC/L.855), 1994.
25. El movimiento de capitales en la Argentina, José María Fanelli y José Luis Machinea (LC/L.857), 1994.
26. Repunte de los flujos de capital y el desarrollo: implicaciones para las políticas económicas, Robert Devlin, Ricardo French-Davis y Stephany Griffith-Jones (LC/L.859), 1994.
27. Flujos de capital: el caso de México, José Angel Guirría Treviño (LC/L.861), 1994.
28. El financiamiento Latinoamericano en los mercados de capital de Japón, Punam Chuhan y Kwang W. Ju (LC/L.862), 1994.
29. Reforma a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe, Andras Uthoff (LC/L.879), 1995.

30. Acumulación de reservas internacionales: sus causas efectos en el caso de Colombia, Roberto Steiner y Andrés Escobar (LC/L.901), 1995.
31. Financiamiento de las unidades económicas de pequeña escala en Ecuador, José Lanusse, Roberto Hidalgo y Soledad Córdova (LC/L.903), 1995.
32. Acceso de la pequeña y microempresa al sistema financiero en Bolivia: situación actual y perspectivas, Roberto Casanovas y Jorge Mc Lean (LC/L.907), 1995.
33. Private international capital flows to Brazil, Dionisio Dias Carneiro y Marcio G.P. Gracia (LC/L.909), 1995.
34. Políticas de financiamiento de las empresas de menor tamaño: experiencias recientes en América Latina, Günther Held (LC/L.911), 1995.
35. Flujos financieros internacionales privados de capital a Costa Rica, Juan Rafael Vargas (LC/L.914), 1995.
36. Distribución del ingreso, asignación de recursos y shocks macroeconómicos. Un modelo de equilibrio general computado para la Argentina en 1993, Omar Chisari y Carlos Romero (LC/L.940), 1996.
37. Operación de conglomerados financieros en Chile: una propuesta, Cristián Larraín (LC/L.949), 1996.
38. Efectos de los shocks macroeconómicos y de las políticas de ajuste sobre la distribución del ingreso en Colombia, Eduardo Lora y Cristina Fernández (LC/L.965), 1996.
39. Nota sobre el aumento del ahorro nacional en Chile, 1980-1994, Patricio Arrau Pons (LC/L.984), 1996.
40. Flujos de capital externo en América Latina y el Caribe: experiencias y políticas en los noventa, Günther Held y Raquel Szalachman (LC/L.1002), 1997.
41. Surgimiento y desarrollo de los grupos financieros en México, Angel Palomino Hasbach (LC/L.1003), 1997.
42. Costa Rica: una revisión de las políticas de vivienda aplicadas a partir de 1986, Miguel Gutiérrez Saxe y Ana Jimena Vargas Cullel (LC/L.1004), 1997.
43. Choques, respostas de politica económica e distribucao de renda no Brasil, André Urani, Ajax Moreira y Luis Daniel Willcox (LC/L.1005), 1997.
44. Distribución del ingreso, shocks y políticas macroeconómicas, L. Felipe Jiménez (LC/L.1006), 1997.
45. Pension Reforms in Central and Eastern Europe: Necessity, approaches and open questions, Robert Holzmann (LC/L.1007), 1997.
46. Financiamiento de la vivienda de estratos de ingresos medios y bajos: la experiencia chilena, Sergio Almarza Alamos (LC/L.1008), 1997.
47. La reforma a la seguridad social en salud de Colombia y la teoría de la competencia regulada, Mauricio Restrepo Trujillo (LC/L.1009), 1997.
48. On Economic Benefits and Fiscal Requirements of Moving from Unfunded to Funded Pensions, Robert Holzmann (LC/L.1012), 1997.
49. Eficiencia y equidad en el sistema de salud chileno, Osvaldo Larrañaga (LC/L.1030), 1997. [www](#)
50. La competencia manejada y reformas para el sector salud de Chile, Cristián Aedo (LC/L.1031), 1997.
51. Mecanismos de pago/contratación del régimen contributivo dentro del marco de seguridad social en Colombia, Beatriz Plaza (LC/L.1032), 1997.
52. A Comparative study of Health Care Policy in United States and Canada: What Policymakers in Latin America Might and Might Not Learn From Their Neighbors to the North, Joseph White (LC/L.1033), 1997. [www](#)
53. Reforma al sector salud en Argentina, Roberto Tafani (LC/L.1035), 1997. [www](#)
54. Hacia una mayor equidad en la salud: el caso de Chile, Uri Wainer (LC/L.1036), 1997.
55. El financiamiento del sistema de seguridad social en salud en Colombia, Luis Gonzalo Morales (LC/L.1037), 1997. [www](#)
56. Las instituciones de salud previsional (ISAPRES) en Chile, Ricardo Bitrán y Francisco Xavier Almarza (LC/L.1038), 1997.
57. Gasto y financiamiento en salud en Argentina, María Cristina V. de Flood (LC/L.1040), 1997.
58. Mujer y salud, María Cristina V. de Flood (LC/L.1041), 1997.
59. Tendencias, escenarios y fenómenos emergentes en la configuración del sector salud en la Argentina, Hugo E. Arce (LC/L.1042), 1997.
60. Reformas al financiamiento del sistema de salud en Argentina, Silvia Montoya (LC/L.1043), 1997.
61. Logros y desafíos de la financiación a la vivienda para los grupos de ingresos medios y bajos en Colombia, Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (LC/L.1039), 1997.
62. Acceso ao financiamento para moradia pelos extratos de média e baixa renda. A experiência brasileira recente, José Pereira Goncalves (LC/L.1044), 1997.
63. Acceso a la vivienda y subsidios directos a la demanda: análisis y lecciones de las experiencias latinoamericanas, Gerardo Gonzales Arrieta (LC/L.1045), 1997.

64. Crisis financiera y regulación de multibancos en Venezuela, Leopoldo Yáñez (LC/L.1046), 1997.
65. Reforma al sistema financiero y regulación de conglomerados financieros en Argentina, Carlos Rivas (LC/L.1047), 1997.
66. Regulación y supervisión de conglomerados financieros en Colombia, Luis A. Zuleta Jaramillo (LC/L.1049), 1997. [www](#)
67. Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Argentina, 1980-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1055), 1997.
68. Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Colombia, 1980-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1060), 1997.
69. Algunos factores que inciden en la distribución del ingreso en Chile, 1987-1992. Un análisis descriptivo, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1067), 1997.
70. Un análisis descriptivo de la distribución del ingreso en México, 1984-1992, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1068), 1997.
71. Un análisis descriptivo de factores que inciden en la distribución del ingreso en Brasil, 1979-1990, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1077 y Corr.1), 1997.
72. Rasgos estilizados de la distribución del ingreso en cinco países de América Latina y lineamientos generales para una política redistributiva, L. Felipe Jiménez y Nora Ruedi (LC/L.1084), 1997.
73. Perspectiva de género en la reforma de la seguridad social en salud en Colombia, Amparo Hernández Bello (LC/L.1108), 1998.
74. Reformas a la institucionalidad del crédito y el financiamiento a empresas de menor tamaño: La experiencia chilena con sistemas de segundo piso 1990-1998, Juan Foxley (LC/L.1156), 1998. [www](#)
75. El factor institucional en reformas a las políticas de crédito y financiamiento de empresas de menor tamaño: la experiencia colombiana reciente, Luis Alberto Zuleta Jaramillo (LC/L.1163), 1999. [www](#)
76. Un perfil del déficit de vivienda en Uruguay, 1994, Raquel Szalachman (LC/L.1165), 1999. [www](#)
77. El financiamiento de la pequeña y mediana empresa en Costa Rica: análisis del comportamiento reciente y propuestas de reforma, Francisco de Paula Gutiérrez y Rodrigo Bolaños Zamora (LC/L.1178), 1999.
78. El factor institucional en los resultados y desafíos de la política de vivienda de interés social en Chile, Alvaro Pérez-Iñigo González (LC/L.1194), 1999. [www](#)
79. Un perfil del déficit de vivienda en Bolivia, 1992, Raquel Szalachman (LC/L.1200), 1999. [www](#)
80. La política de vivienda de interés social en Colombia en los noventa, María Luisa Chiappe de Villa (LC/L.1211-P), N° de venta: S.99.II.G.10 (US\$10.0), 1999. [www](#)
81. El factor institucional en reformas a la política de vivienda de interés social: la experiencia reciente de Costa Rica, Rebeca Grynspan y Dennis Meléndez (LC/L.1212-P), N° de venta: S.99.II.G.11 (US\$10.0), 1999. [www](#)
82. O financiamento do sistema público de saúde brasileiro, Rosa María Márques, (LC/L.1233-P), N° de venta: S.99.II.G.14 (US\$10.0), 1999. [www](#)
83. Un perfil del déficit de vivienda en Colombia, 1994, Raquel Szalachman, (LC/L.1234-P), N° de venta: S.99.II.G.15 (US\$10.0), 1999. [www](#)
84. Políticas de crédito para empresas de menor tamaño con bancos de segundo piso: experiencias recientes en Chile, Colombia y Costa Rica, Günther Held, (LC/L.1259-P), N° de venta: S.99.II.G.34 (US\$10.0), 1999. [www](#)
85. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso del Perú. Gerardo Gonzales Arrieta, (LC/L.1245-P), N° de venta: S.99.II.G.29 (US\$10.0), 1999. [www](#)
86. Políticas para la reducción de costos en los sistemas de pensiones: el caso de Chile. Jorge Mastrángelo, (LC/L.1246-P), N° de venta: S.99.II.G.36 (US\$10.0), 1999. [www](#)
87. Price-based capital account regulations: the Colombian experience. José Antonio Ocampo and Camilo Ernesto Tovar, (LC/L.1243-P), Sales Number: E.99.II.G.41 (US\$10.0), 1999. [www](#)
88. Transitional Fiscal Costs and Demographic Factors in Shifting from Unfunded to Funded Pension in Latin America. Jorge Bravo and Andras Uthoff (LC/L.1264-P), Sales Number: E.99.II.G.38 (US\$10.0), 1999. [www](#)
89. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de El Salvador. Francisco Angel Sorto, (LC/L.1265-P), N° de venta: S.99.II.G.46 (US\$10.0), 1999. [www](#)
90. Liberalización, crisis y reforma del sistema bancario chileno: 1974-1999, Günther Held y Luis Felipe Jiménez, (LC/L.1271-P), N° de venta: S.99.II.G.53 (US\$10.0), 1999. [www](#)
91. Evolución y reforma del sistema de salud en México, Enrique Dávila y Maite Guijarro, (LC/L.1314-P), N° de venta: S.00.II.G.7 (US\$10.0), 2000. [www](#)
92. Un perfil del déficit de vivienda en Chile, 1994. Raquel Szalachman (LC/L.1337-P), N° de venta: S.00.II.G.22 (US\$10.0), 2000. [www](#)

93. Estudio comparativo de los costos fiscales en la transición de ocho reformas de pensiones en América Latina. Carmelo Mesa-Lago, (LC/L.1344-P), N° de venta: S.00.II.G.29 (US\$10.0), 2000. [www](#)
94. Proyección de responsabilidades fiscales asociadas a la reforma previsional en Argentina, Walter Schulthess, Fabio Bertranou y Carlos Grushka, (LC/L.1345-P), N° de venta: S.00.II.G.30 (US\$10.0), 2000. [www](#)
95. Riesgo del aseguramiento en el sistema de salud en Colombia en 1997, Humberto Mora Alvarez, (LC/L.1372-P), N° de venta: S.00.II.G.51 (US\$10.0), 2000. [www](#)
96. Políticas de viviendas de interés social orientadas al mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica y Colombia, Günther Held, (LC/L.1382-P), N° de venta: S.00.II.G.55 (US\$10.0), 2000. [www](#)
97. Reforma previsional en Brasil. La nueva regla para el cálculo de los beneficiarios, Vinicius Carvalho Pinheiro y Solange Paiva Vieira, (LC/L.1386-P), N° de venta: S.00.II.G.62 (US\$10.0), 2000. [www](#)
98. Costos e incentivos en la organización de un sistema de pensiones, Adolfo Rodríguez Herrera y Fabio Durán Valverde, (LC/L.1388-P), N° de venta: S.00.II.G.63 (US\$10.0), 2000. [www](#)
99. Políticas para canalizar mayores recursos de los fondos de pensiones hacia la inversión real en México, Luis N. Rubalcava y Octavio Gutiérrez (LC/L.1393-P), N° de venta: S.00.II.G.66 (US\$10.0), 2000. [www](#)
100. Los costos de la transición en un régimen de beneficio definido, Adolfo Rodríguez y Fabio Durán (LC/L.1405-P), N° de venta: S.00.II.G.74 (US\$10.0), 2000. [www](#)
101. Efectos fiscales de la reforma de la seguridad social en Uruguay, Nelson Noya y Silvia Laens, (LC/L.1408-P), N° de venta: S.00.II.G.78 (US\$10.0), 2000. [www](#)
102. Pension funds and the financing productive investment. An analysis based on Brazil's recent experience, Rogerio Studart, (LC/L.1409-P), Sales Number: E.00.II.G.83 (US\$10.0), 2000. [www](#)
103. Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: situación de algunos países de la región en los noventa, Raquel Szalachman, (LC/L.1417-P), N° de venta: S.00.II.G.89 (US\$10.0), 2000. [www](#)
104. Reformas al sistema de salud en Chile: Desafíos pendientes, Daniel Titelman, (LC/L.1425-P), N° de venta: S.00.II.G.99 (US\$10.0), 2000. [www](#)
105. Cobertura previsional en Chile: Lecciones y desafíos del sistema de pensiones administrado por el sector privado, Alberto Arenas de Mesa (LC/L.1457-P), N° de venta: S.00.II.G.137 (US\$10.0), 2000. [www](#)
106. Resultados y rendimiento del gasto en el sector público de salud en Chile 1990-1999, Jorge Rodríguez C. y Marcelo Tokman R. (LC/L.1458-P), N° de venta: S.00.II.G.139 (US\$10.0), 2000. [www](#)
107. Políticas para promover una ampliación de la cobertura de los sistemas de pensiones, Gonzalo Hernández Licón (LC/L.1482-P), N° de venta: S.01.II.G.15 (US\$10.0), 2001. [www](#)
108. Evolución de la equidad en el sistema colombiano de salud, Ramón Abel Castaño, José J. Arbelaez, Ursula Giedion y Luis Gonzalo Morales (LC/L.1526-P), N° de venta: S.01.II.G.71 (US\$10.0), 2001. [www](#)
109. El sector privado en el sistema de salud de Costa Rica, Fernando Herrero y Fabio Durán (LC/L.1527-P), N° de venta: S.01.II.G.72 (US\$10.00), 2001. [www](#)
110. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de Uruguay, Fernando Lorenzo y Rosa Osimani (LC/L.1547-P), N° de venta: S.01.II.G.88 (US\$10.00), 2001. [www](#)
111. Reformas del sistema de salud en Venezuela (1987-1999): balance y perspectivas, Marino J. González R. (LC/L.1553-P), N° de venta: S.01.II.G.95 (US\$10.00), 2001. [www](#)
112. La reforma del sistema de pensiones en Chile: desafíos pendientes, Andras Uthoff (LC/L.1575-P), N° de venta: S.01.II.G.118 (US\$10.00), 2001.
113. International Finance and Caribbean Development, P. Desmond Brunton and S. Valerie Kelsick (LC/L.1609-P), Sales Number: E.01.II.G.151 (US\$10.00), 2001. [www](#)
114. Pension Reform in Europe in the 90s and Lessons for Latin America, Louise Fox and Edward Palmer (LC/L.1628-P), Sales Number: E.01.II.G.166 (US\$10.00), 2001. [www](#)
115. El ahorro familiar en Chile, Enrique Errázuriz L., Fernando Ochoa C., Eliana Olivares B. (LC/L.1629-P), N° de venta: S.01.II.G.174 (US\$10.00), 2001. [www](#)
116. Reformas pensionales y costos fiscales en Colombia, Olga Lucía Acosta y Ulpiano Ayala (LC/L.1630-P), N° de venta: S.01.II.G.167 (US\$10.00), 2001. [www](#)
117. La crisis de la deuda, el financiamiento internacional y la participación del sector privado, José Luis Machinea, (LC/L.1713-P), N° de venta: S.02.II.G.23 (US\$10.00), 2002. [www](#)
118. Políticas para promover una ampliación de la cobertura del sistema de pensiones en Colombia, Ulpiano Ayala y Olga Lucía Acosta, (LC/L.1724-P), N° de venta: S.02.II.G.39 (US\$10.00), 2002. [www](#)
119. La banca multilateral de desarrollo en América Latina, Francisco Sagasti, (LC/L.1731-P), N° de venta: S.02.II.G.42 (US\$10.00), 2002. [www](#)
120. Alternativas de política para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos en Bolivia, Juan Carlos Requena, (LC/L.1747-P), N° de venta: S.02.II.G.59 (US\$10.00), 2002. [www](#)

121. Multilateral Banking and Development Financing in a Context of Financial Volatility, Daniel Titelman, (LC/L.1746-P), Sales Number: E.02.II.G.58 (US\$10.00), 2002. [www](#)
122. El crédito hipotecario y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos en América Latina, Gerardo M. Gonzales Arrieta, (LC/L.1779-P), N° de venta S.02.II.G.94 (US\$10.00), 2002. [www](#)
123. Equidad de género en el sistema de salud chileno, Molly Pollack E., (LC/L.1784-P), N° de venta S.02.II.G.99 (US\$10.00), 2002. [www](#)
124. Alternativas de políticas para fortalecer el ahorro de los hogares de menores ingresos: el caso de Costa Rica, Saúl Weisleder, (LC/L.1825-P), N° de venta S.02.II.G.132 (US\$10.00), 2002. [www](#)
125. From hard-peg to hard landing? Recent experiences of Argentina and Ecuador, Alfredo Calcagno, Sandra Manuelito, Daniel Titelman, (LC/L.1849-P), Sales Number: E.03.II.G.17 (US\$10.00), 2003. [www](#)
126. Un análisis de la regulación prudencial en el caso colombiano y propuestas para reducir sus efectos procíclicos, Néstor Humberto Martínez Neira y José Miguel Calderón López, (LC/L.1852-P), N° de venta S.03.II.G.20 (US\$10.00), 2003. [www](#)
127. Hacia una visión integrada para enfrentar la inestabilidad y el riesgo, Víctor E. Tokman, (LC/L.1877-P), N° de venta S.03.II.G.44 (US\$10.00), 2003. [www](#)
128. Promoviendo el ahorro de los grupos de menores ingresos: experiencias latinoamericanas., Raquel Szalachman, (LC/L.1878-P), N° de venta: S.03.II.G.45 (US\$10.00), 2003. [www](#)
129. Macroeconomic success and social vulnerability: lessons for Latin America from the celtic tiger, Peadar Kirby, (LC/L.1879-P), Sales Number E.03.II.G.46 (US\$10.00), 2003. [www](#)
130. Vulnerabilidad del empleo en Lima. Un enfoque a partir de encuestas a hogares, Javier Herrera y Nancy Hidalgo, (LC/L.1880-P), N° de venta S.03.II.G.49 (US\$10.00), 2003. [www](#)
131. Evaluación de las reformas a los sistemas de pensiones: cuatro aspectos críticos y sugerencias de políticas, Luis Felipe Jiménez y Jessica Cuadros (LC/L.1913-P), N° de venta S.03.II.G.71 (US\$10.00), 2003. [www](#)
132. Macroeconomic volatility and social vulnerability in Brazil: The Cardoso government (1995-2002) and perspectives, Roberto Macedo (LC/L.1914-P), Sales Number E.03.II.G.72 (US\$10.00), 2003. [www](#)
133. Seguros de desempleo, objetivos, características y situación en América Latina, Mario D. Velásquez Pinto, (LC/L.1917-P), N° de venta S.03.II.G.73 (US\$10.00), 2003. [www](#)
134. Incertidumbre económica, seguros sociales, solidaridad y responsabilidad fiscal, Daniel Titelman y Andras Uthoff (LC/L.1919-P), N° de venta S.03.II.G.74 (US\$10.00), 2003. [www](#)
135. Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social. La Argentina en los años noventa, Mario Damill, Roberto Frenkel y Roxana Maurizio, (LC/L.1929-P), N° de venta S.03.II.G.84 (US\$10.00), 2003. [www](#)
136. Política fiscal y protección social: sus vínculos en la experiencia chilena, Alberto Arenas de Mesa y Julio Guzmán Cox, (LC/L.1930-P), N° de venta S.03.II.G.86 (US\$10.00), 2003. [www](#)
137. La banca de desarrollo y el financiamiento productivo, Daniel Titelman, (LC/L.1980-P), N° de venta S.03.II.G.139 (US\$10.00), 2003. [www](#)
138. Acceso al crédito bancario de las microempresas chilenas: lecciones de la década de los noventa, Enrique Román, (LC/L.1981-P), N° de venta S.03.II.G.140 (US\$10.00), 2003. [www](#)
139. Microfinanzas en Centroamérica: los avances y desafíos, Iris Villalobos, Arie Sanders y Marieke de Ruijter de Wildt, (LC/L.1982-P), N° de venta: S.03.II.G.141 (US\$10.00), 2003. [www](#)

- El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, correo electrónico: publications@eclac.cl.

[www](#) Disponible también en Internet: <http://www.cepal.org/> o <http://www.eclac.org>

Nombre:

Actividad:

Dirección:

Código postal, ciudad, país:

Tel.: Fax: E.mail: